



# Asamblea General

Distr. general  
18 de noviembre de 2021  
Español  
Original: inglés

---

## Consejo de Derechos Humanos

Grupo de Trabajo sobre el Examen Periódico Universal

40º período de sesiones

24 de enero a 4 de febrero de 2022

### Informe nacional presentado con arreglo al párrafo 5 del anexo de la resolución 16/21 del Consejo de Derechos Humanos\*

**República de Moldova**

---

\* La versión original del presente documento no fue objeto de revisión editorial oficial.



## I. Metodología y proceso de consulta

1. El presente informe se ha preparado de conformidad con los requisitos establecidos en la resolución 5/1 del Consejo de Derechos Humanos y en las directrices generales para la preparación de la información en el marco del examen periódico universal que figuran en el documento A/HRC/DEC/17/119, y se centra en la evolución de la legislación y las políticas en materia de derechos humanos en la República de Moldova desde el último examen, incluidos los progresos realizados en la aplicación de las recomendaciones recibidas en los ciclos anteriores del examen periódico universal.
2. El informe fue redactado por la Cancillería del Estado (Secretaría Permanente de Derechos Humanos) con la contribución de las autoridades e instituciones nacionales pertinentes<sup>1</sup>. Además de las consultas interministeriales, el proyecto de informe ha sido ampliamente consultado con las instituciones nacionales de derechos humanos y las organizaciones de la sociedad civil. Las observaciones recibidas fueron evaluadas cuidadosamente en la preparación de la versión final del informe, que posteriormente fue aprobado por el Consejo Nacional de Derechos Humanos.

## II. Evolución de la situación de los derechos humanos tras el segundo ciclo de examen

### A. Marco jurídico e institucional para la protección de los derechos humanos

3. El **Plan de Acción Nacional de Derechos Humanos para el período 2018-2022** fue aprobado mediante la Decisión Parlamentaria núm. 89/2018. Dicho Plan de Acción se basó en las recomendaciones aceptadas por la República de Moldova en el segundo ciclo del examen periódico universal, así como en las recomendaciones recibidas de otros órganos de vigilancia de los derechos humanos de las Naciones Unidas, el Consejo de Europa, la Organización para la Seguridad y la Cooperación en Europa (OSCE) y otros mecanismos internacionales. En la preparación del Plan de Acción también se tuvieron en cuenta los *Objetivos de Desarrollo Sostenible* establecidos en la Agenda 2030. El Plan de Acción tiene el propósito de apoyar a las autoridades públicas en la reconfiguración del proceso de formulación de las políticas a nivel central y local, desde un enfoque centrado en los derechos humanos, en particular prestando la debida atención a los obstáculos que enfrentan los grupos minoritarios y vulnerables para hacer plenamente efectivos sus derechos fundamentales<sup>2</sup>.
4. Con el fin de asegurar un mecanismo eficaz para la elaboración y evaluación de los documentos de políticas de derechos humanos, una aplicación eficaz de los tratados internacionales de derechos humanos en los que la República de Moldova es parte y la supervisión del cumplimiento de los compromisos adquiridos, el Gobierno ha establecido el **Consejo Nacional de Derechos Humanos**<sup>3</sup>, la Secretaría Permanente de Derechos Humanos y las estructuras locales del Consejo, así como coordinadores de derechos humanos a nivel central y local.
5. Se han elaborado los informes anuales sobre la aplicación del Plan de Acción Nacional de Derechos Humanos 2018-2020<sup>4</sup>, lo que incluyó la celebración de consultas, y estos se han publicado en la página web de la Cancillería del Estado, en la sección dedicada al Consejo Nacional de Derechos Humanos<sup>5</sup>.
6. A nivel local, se han creado 33 comisiones de derechos humanos a nivel municipal y de distrito, a fin de asegurar la implementación de planes y programas locales que den aplicación a los documentos nacionales de políticas relativos a la protección de los derechos humanos y la supervisión de la situación de los derechos humanos a nivel local.
7. Asimismo, se han nombrado 27 coordinadores de derechos humanos a nivel central y 21 coordinadores de derechos humanos a nivel local en el seno de las autoridades responsables.

## B. Instituciones nacionales de derechos humanos

8. A fin de reforzar la institución del Defensor del Pueblo, en 2017 se complementó la Constitución de la República de Moldova con un capítulo (III) titulado “Defensor del Pueblo”, asegurando así la protección constitucional de la independencia del Defensor del Pueblo ante las influencias políticas<sup>6</sup>.

9. En mayo de 2018, la Oficina del Defensor del Pueblo fue acreditada por la Alianza Global de las Instituciones Nacionales de Derechos Humanos con la categoría “A”, reconociendo así que el mandato y la actividad el Defensor del Pueblo moldavo está en conformidad con los Principios de París.

10. También se ha iniciado el proceso de modificación de la Ley del Defensor del Pueblo (Ombudsman)<sup>7</sup>, a fin de reforzar aún más el papel de esta institución. En la preparación del proyecto de ley se tomaron en consideración las observaciones formuladas por la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ACNUDH), el dictamen de la Comisión Europea para la Democracia por el Derecho (la Comisión de Venecia), el dictamen de la Dirección General de Derechos Humanos y Estado de Derecho del Consejo de Europa y las recomendaciones del Subcomité de Acreditación de la Alianza Global de las Instituciones Nacionales de Derechos Humanos. El proyecto de ley se encuentra actualmente en el proceso oficial de consultas antes de ser enviado al Gobierno y al Parlamento para su aprobación.

11. Con el propósito de ayudar a los agentes económicos a contrarrestar los abusos, especialmente por parte de las autoridades e instituciones públicas, y también de subsanar las deficiencias en el marco normativo, el Gobierno aprobó un proyecto de ley para establecer la figura del *Defensor de los Derechos de los Empresarios*<sup>8</sup>, que está siendo objeto de examen en el Parlamento.

12. Con objeto de reforzar la labor del Consejo para Prevenir y Eliminar la Discriminación y Asegurar la Igualdad, se han propuesto modificaciones en la ley que regula la actividad de ese Consejo<sup>9</sup> y el marco normativo conexo. Dichos cambios se centran en: la clarificación de las competencias del Consejo; la ampliación de los criterios de no discriminación; la mejora de la recopilación de datos sobre igualdad, no discriminación y diversidad; el seguimiento, la evaluación y la presentación anual de informes sobre los resultados; y el fortalecimiento del marco institucional pertinente. Asimismo, se sugiere asignar al Consejo el derecho a dirigirse al Tribunal Constitucional. Esta competencia ayudaría al Consejo a desempeñar un papel proactivo a la hora de asegurar el cumplimiento de las normas relativas a la no discriminación<sup>10</sup>. El proyecto de ley deberá someterse a los procedimientos de remisión y, posteriormente, ser aprobado por el Gobierno y el Parlamento.

## C. Adhesión a los instrumentos internacionales de derechos humanos

13. La República de Moldova es parte en la mayoría de los principales tratados internacionales de derechos humanos, que establecen las normas más estrictas para proteger la dignidad humana y hacer plenamente efectivos los derechos y libertades fundamentales. En el período que se examina, el Estado ha firmado una serie de instrumentos internacionales o se ha adherido a ellos:

- Se adhirió al Acuerdo sobre los Privilegios e Inmunidades de la Corte Penal Internacional<sup>11</sup>. A fin de facilitar la cooperación con la Corte, en 2019 se preparó un proyecto de ley para modificar el Código de Procedimiento Penal y la Ley de Asistencia Jurídica Internacional en Asuntos Penales<sup>12</sup>. Actualmente el documento está siendo objeto de examen para su aprobación por el Gobierno.
- El 27 de septiembre de 2018 firmó el Protocolo Facultativo de la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad de las Naciones Unidas. El proyecto de ley para ratificar el Protocolo Facultativo se redactará en 2021.
- Ratificó el Protocolo Adicional al Convenio sobre la Ciberdelincuencia del Consejo de Europa<sup>13</sup> relativo a la Penalización de Actos de Índole Racista y Xenófoba Cometidos por Medio de Sistemas Informáticos.

- Firmó el Protocolo núm. 16 del Convenio Europeo de Derechos Humanos<sup>14</sup>.
- El 14 de octubre de 2021 ratificó el Convenio del Consejo de Europa sobre Prevención y Lucha contra la Violencia contra las Mujeres y la Violencia Doméstica<sup>15</sup>.
- Armonizó la legislación de la República de Moldova con las disposiciones del Convenio del Consejo de Europa sobre Prevención y Lucha contra la Violencia contra las Mujeres y la Violencia Doméstica<sup>16</sup>.
- En el período objeto de examen, en diciembre de 2020, entró en vigor el Convenio del Consejo de Europa sobre el Acceso a los Documentos Públicos, ratificado por la República de Moldova en 2016, reforzando así el ejercicio de la libertad de buscar y compartir información, esencial para asegurar la transparencia, la buena gobernanza, la libertad de expresión y la democracia participativa.

### **III. Aplicación de las recomendaciones resultantes del segundo ciclo del examen periódico universal**

14. Tras el segundo ciclo del examen periódico universal, la República de Moldova recibió **209 recomendaciones**, de las que *aceptó 194* y tomó nota de 15. De las 194 recomendaciones aceptadas, 138 se han aplicado plenamente, 45 se han aplicado parcialmente y 11 todavía no se han puesto en práctica.

#### **Cooperación con los procedimientos especiales, la sociedad civil y los defensores de los derechos humanos (121.43, 121.134, 121.132, 121.135, 121.133, 121.136)**

15. La República de Moldova ha seguido cooperando con los mecanismos internacionales de derechos humanos, incluidos los procedimientos especiales del Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas<sup>17</sup>, sobre la base de la invitación permanente cursada en 2010.

16. La República de Moldova ha continuado la estrecha cooperación con el ACNUDH y, en el período objeto de examen, se acordó la ampliación de la presencia del ACNUDH en el país. Además, en 2018 y 2019, el Gobierno ofreció contribuciones voluntarias al presupuesto del ACNUDH.

17. La República de Moldova ha participado activamente en la labor del Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas como observador, y en 2019 participó en las elecciones para el mandato 2020-2022. Aunque la República de Moldova no obtuvo la condición de miembro, asumió algunos compromisos voluntarios y reiteró su posición con respecto a la cooperación con los mecanismos internacionales.

18. Las autoridades moldavas han apoyado el acceso sin restricciones de los **mecanismos internacionales de vigilancia de los derechos humanos** a la región de la orilla izquierda del río Nistru<sup>18</sup>.

19. De 2016 a 2020, la República de Moldova ha presentado los **informes periódicos**<sup>19</sup> relativos a todos los tratados internacionales de derechos humanos en los que es parte.

20. La República de Moldova ha aprobado la **Estrategia de Desarrollo de la Sociedad Civil 2018-2020**<sup>20</sup>, con el fin de establecer un marco normativo común y racionalizar los esfuerzos destinados a desarrollar la sociedad civil y promover la cohesión social.

21. A fin de armonizar el marco reglamentario con las normas internacionales sobre la **libertad de asociación**, se ha aprobado una nueva Ley de las Organizaciones Sin Ánimo de Lucro<sup>21</sup>. La nueva Ley ha simplificado el procedimiento de registro de estas organizaciones y proporciona garantías adicionales para proteger la libertad de asociación.

22. Con objeto de asegurar la participación de la sociedad civil, cinco miembros del Consejo Nacional de Derechos Humanos son representantes de organizaciones sin ánimo de lucro, con derecho a voto consultivo.

23. Las autoridades públicas aseguran la cooperación con las organizaciones sin ánimo de lucro en una serie de plataformas de consulta y asesoramiento especializado en la elaboración, aplicación y evaluación de las políticas, la contratación de servicios sociales y los instrumentos de apoyo financiero. Además, según la legislación nacional<sup>22</sup>, la aprobación de leyes y reglamentos se basa en los principios de transparencia, publicidad y accesibilidad, lo que requiere la participación de la sociedad civil en la elaboración de los instrumentos normativos. Al mismo tiempo, **se ha mejorado el mecanismo de designación porcentual de las organizaciones sin ánimo de lucro**<sup>23</sup> a fin de eliminar algunas ambigüedades en su aplicación.

#### **Libertad de expresión y acceso a la información (121.166, 121.64, 121.30, 121.31, 121.139, 121.142, 121.141, 121.143, 121.144, 121.140, 121.138, 122.28)**

24. La necesidad de asegurar la **libertad de expresión** ha determinado la aprobación<sup>24</sup> del **Código de Servicios de Medios Audiovisuales de la República de Moldova**. Dicho Código establece garantías para la libertad de expresión y la libertad de los medios de comunicación, el acceso a la información y la protección de los periodistas, en consonancia con las normas europeas.

25. A fin de asegurar la transparencia acerca de la propiedad de los medios de comunicación<sup>25</sup> y de mejorar el acceso de los ciudadanos a la información de interés público en el ámbito audiovisual, el Consejo de Radio y Televisión publica todas las declaraciones de los proveedores de servicios de medios audiovisuales en la sección dedicada a la transparencia de su página web<sup>26</sup>.

26. El Parlamento promulgó la Ley núm. 299/2017 sobre la aprobación del **Concepto de Seguridad de la Información de la República de Moldova** y aceptó la Decisión núm. 256/2018 sobre la aprobación del *Programa de Medidas para la Aplicación del Concepto de Seguridad de la Información de la República de Moldova*.

27. La Ley sobre la Competencia se ha complementado<sup>27</sup> con el artículo 251 (**Evaluación de las concentraciones económicas en los medios de comunicación**), cuyo objeto es prevenir y combatir las prácticas anticompetitivas y la aparición de concentraciones económicas en el mercado.

28. El Parlamento ha realizado una evaluación *ex post* de los efectos de la Ley de Acceso a la Información<sup>28</sup> y ha preparado un conjunto de modificaciones normativas relativas a la información de interés público.

29. En 2019, la Academia de Administración Pública incluyó un nuevo componente sobre la transparencia y el acceso a la información en la toma de decisiones en el curso “Integración Profesional para Funcionarios”, destinado a los funcionarios de nivel inicial, y creó el **curso en línea “Acceso a la información”**, destinado a los funcionarios de las autoridades públicas de nivel central y local, con el fin de que adquieran formación sobre la obligación de asegurar un acceso pleno y sin limitaciones a la información de interés público<sup>29</sup>.

#### **Igualdad y no discriminación/Minorías nacionales y migrantes (121.69, 121.70, 121.71, 122.21, 122.22, 122.20, 121.17, 121.72, 121.45, 121.153, 121.62, 121.60, 121.61, 121.73, 122.17, 122.18, 122.24, 122.25, 121.65, 121.67, 121.167, 121.163, 121.15, 121.169, 121.172, 121.168, 121.44, 121.170, 121.66, 121.171, 121.164, 121.165, 122.31)**

30. **Asegurar la igualdad** es una de las prioridades nacionales en materia de derechos humanos en la República de Moldova, y su consecución requiere la aplicación de un enfoque basado en los derechos humanos en la formulación de políticas, con el fin de crear igualdad de oportunidades para que todas las personas disfruten de los derechos fundamentales, lo que

incluye la adopción de medidas especiales para asegurar la igualdad y combatir todas las formas de discriminación.

31. El compromiso del Estado de mostrar una **actitud de “tolerancia cero” ante los prejuicios y el odio** se refleja en un proyecto de ley para modificar algunos instrumentos legislativos que está siendo objeto de examen por el Parlamento<sup>30</sup>. Dicho proyecto de ley prevé la inclusión en el Código Penal de la circunstancia agravante “motivado por prejuicios” en relación con una serie de delitos. Además, propone una nueva redacción del artículo 346 del Código Penal (“Incitación a la comisión de actos violentos motivados por prejuicios”) y la inclusión de un nuevo artículo que defina la noción “motivado por prejuicios”.

32. Cuando registran las denuncias sobre acciones relacionadas con prejuicios, los fiscales, que son quienes controlan el registro, la conservación y el examen de las notificaciones de delitos, deben prestar especial atención al procedimiento de recepción y registro de las notificaciones relativas a la discriminación o la violencia basadas en el origen étnico, la religión o cualquier otro criterio.

33. En el ámbito de la educación, se han introducido dos asignaturas en la lista de asignaturas obligatorias, *Desarrollo personal y Educación para la sociedad*, que abordan directa o indirectamente temas tales como la apreciación de la diversidad cultural, el pluralismo, la tolerancia, las relaciones armoniosas, los estereotipos, y la comunicación asertiva, no conflictiva y no violenta.

34. **El Código de Servicios de Medios Audiovisuales**<sup>31</sup> contiene disposiciones relacionadas con el respeto de los derechos y libertades fundamentales, y prohíbe los programas audiovisuales que puedan difundir, incitar, promover o justificar el odio racial, la xenofobia, el antisemitismo u otras formas de odio basadas en la intolerancia o la discriminación por motivos de sexo, raza, nacionalidad, religión, discapacidad u orientación sexual. El Consejo de Radio y Televisión aprobó el **Reglamento sobre los Contenidos Audiovisuales**<sup>32</sup>, que incluye disposiciones sobre el discurso de odio y cualquier forma de odio basada en la intolerancia y la discriminación, el ataque a la persona y a la dignidad humana, y los contenidos audiovisuales que alaben los regímenes totalitarios pasados o presentes, o a los autores de crímenes y abusos cometidos bajo esos regímenes, o que denigren a sus víctimas.

35. A fin de condenar el antisemitismo, se han tomado las siguientes medidas:

- El 27 de enero de 2018 se inauguró en la Casa de las Nacionalidades el Centro-Museo dedicado a la historia del Holocausto, que difunde acontecimientos históricos, libros, monografías, fotografías y documentales.
- Se ha incluido el 27 de enero como Día Nacional de la Memoria del Holocausto en la lista de fechas conmemorativas oficiales<sup>33</sup>.
- El Gobierno aprobó el Plan de Acción 2017-2019<sup>34</sup> para Aplicar la Declaración del Parlamento de la República de Moldova por la que se Aprueba el Informe Final de la Comisión Internacional para el Estudio del Holocausto, presidida por Elie Wiesel.
- El Gobierno de la República de Moldova ha creado el *Museo de Historia de los Judíos de la República de Moldova*<sup>35</sup>. El objetivo principal de la creación de esa institución es poner de relieve la contribución de la comunidad judía al desarrollo de la sociedad moldava en diferentes etapas históricas, así como preservar la memoria del Holocausto y combatir el antisemitismo y la intolerancia. En el mismo contexto, se ha elaborado un plan de acción para la rehabilitación, restauración, preservación, aprovechamiento y promoción del cementerio judío de Chisinau y la creación de un complejo histórico conmemorativo dedicado a los judíos que han vivido y trabajado en el territorio de la República de Moldova.
- El Gobierno aprobó la definición de trabajo de “antisemitismo” formulada por la Alianza Internacional para la Memoria del Holocausto<sup>36</sup>.
- El Gobierno ha aprobado el Plan de Acción 2021-2024 para Promover la Memoria del Holocausto y la Cultura de la Tolerancia a fin de Combatir el Racismo, el Antisemitismo, la Xenofobia y Otras Formas de Intolerancia<sup>37</sup>.

36. En cuanto a la accesibilidad de la información sobre la no discriminación, el Consejo de Igualdad, en el marco del proyecto Accesibilidad para Todos<sup>38</sup>, publicó la Ley núm. 121/2012 sobre la Garantía de la Igualdad en un formato de lectura fácil/fácil de entender, de modo que el marco jurídico sea más accesible para las personas con discapacidad y el público en general. Además, en el marco del mismo proyecto, se tradujo la Guía del Solicitante a cuatro idiomas minoritarios (gagaúzo, búlgaro, ucraniano y romaní)<sup>39</sup>.

37. La Oficina del Defensor del Pueblo, la Oficina de Relaciones Interétnicas y el Consejo de Igualdad firmaron un memorando de entendimiento destinado a reforzar su cooperación y aunar esfuerzos para asegurar el ejercicio de los derechos de las minorías nacionales<sup>40</sup>.

38. **La aplicación de la estrategia para consolidar las relaciones interétnicas<sup>41</sup>** se ha centrado en cuatro esferas prioritarias: la participación en la vida pública; el idioma como medio de integración; el diálogo intercultural y la afiliación cívica al Estado de la República de Moldova; y los medios de comunicación<sup>42</sup>.

39. La aplicación de la Ley de Garantía de la Igualdad<sup>43</sup> ha dado lugar a una serie de avances en diversos ámbitos, repercutiendo también en la situación de las minorías nacionales. Los estudios evidencian que se ha producido un ligero aumento del nivel de tolerancia entre la población<sup>44</sup>.

40. Se ha aplicado el **Plan de Acción de Apoyo a la Población Romaní en la República de Moldova 2016-2020<sup>45</sup>**. Se ha ajustado el Reglamento Marco sobre la Organización de la Actividad del **Mediador de la Comunidad<sup>46</sup>** a fin de reforzar el estatus del Mediador y asegurar la financiación de su trabajo con cargo al presupuesto del Estado.

41. En la República de Moldova los **ciudadanos extranjeros** gozan de los mismos derechos y libertades que los ciudadanos moldavos, garantizados por la Constitución de la República de Moldova y otras leyes, así como de los derechos establecidos en los tratados internacionales en los que la República de Moldova es parte, con algunas restricciones<sup>47</sup> que hacen referencia principalmente a los derechos políticos.

42. Además, se ha puesto en práctica el **Plan de Acción para la Aplicación de la Estrategia Nacional de Migración y Asilo 2016-2020<sup>48</sup>**.

43. Se ha modificado el marco jurídico nacional<sup>49</sup> para incorporar los compromisos establecidos en el Acuerdo de Asociación entre la Unión Europea y la República de Moldova. Así, se han establecido procedimientos simplificados para la entrada y la estancia temporal de determinadas categorías de personas en el territorio de ambas partes, en particular para mejorar el entorno empresarial y hacer progresar los servicios y los proveedores de servicios, lo que ha contribuido sustancialmente a reforzar las relaciones comerciales preferenciales basadas en condiciones mutuamente beneficiosas.

44. Se ha modificado y simplificado el procedimiento de documentación de los extranjeros desplazados y se han eliminado algunos obstáculos para obtener el derecho de residencia temporal por motivos de trabajo<sup>50</sup>.

### **Sistema nacional de justicia (121.119, 121.120, 121.121, 121.122, 121.124, 121.125, 121.126, 121.118, 121.123, 121.127)**

45. La **Estrategia de Reforma Judicial** 2011-2016<sup>51</sup> fue la primera política integral para el conjunto del sector y representó un paso importante en el establecimiento de un sistema de justicia moderno<sup>52</sup>.

46. Dado que el período de implementación de la Estrategia de Reforma Judicial finalizó *de jure* a finales de 2017<sup>53</sup>, las políticas institucionales se incorporaron en un documento conceptual, *Direcciones y Acciones Estratégicas*, a fin de asegurar la continuidad del proceso de promoción de reformas en el sector judicial. En 2018, las actividades relativas a la reforma continuaron, sobre la base de una lista de prioridades denominada “La Reforma Intermedia del Sector Judicial”, centrada en intervenciones estratégicas destinadas a reforzar la independencia del poder judicial, fortalecer los mecanismos de rendición de cuentas de los jueces, y asegurar la transparencia y la calidad de la administración de justicia.

47. Tras la aplicación durante seis años de la Estrategia de Reforma Judicial, muchas de las medidas previstas han alcanzado el resultado esperado y, aunque en ocasiones con retraso, se han puesto en práctica numerosas reformas<sup>54</sup>.

48. El 25 de noviembre de 2020, el Parlamento aprobó un **nuevo documento de políticas, la Estrategia para Asegurar la Integridad y la Independencia del Sector Judicial 2021-2024**<sup>55</sup>, que aún no ha entrado en vigor. Dicho documento es una continuación natural de las medidas establecidas en la Estrategia de Reforma Judicial, pero modificando el concepto de reforma para adoptar un enfoque más operativo, destinado a fortalecer el potencial del sector judicial. El principal objetivo del proceso de reforma es conseguir que la sociedad confíe en la acción de la justicia.

49. **El Código Civil y el marco conexo se han modernizado**<sup>56</sup>, en consonancia con la legislación de la Unión Europea y la práctica internacional pertinente, y se han eliminado las contradicciones entre las normas jurídicas y las duplicaciones reglamentarias.

50. Las modificaciones aprobadas en 2018<sup>57</sup> permitieron simplificar el Código de Procedimiento Civil, con el fin de **agilizar los procedimientos judiciales civiles**, sobre la base de: reducir la duración de los juicios, limitar los motivos por los que los participantes pueden solicitar la suspensión del juicio y establecer un nuevo procedimiento judicial simplificado (efectuado únicamente mediante observaciones por escrito) para determinados tipos de causas en las que los daños sean inferiores al equivalente a diez veces el salario medio (aproximadamente 50.000 lei), en las que solo se celebran audiencias cuando es necesario.

51. Desde julio de 2018, con apoyo del Open Justice Program (Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional), se ha instalado una versión mejorada del **Sistema Integrado de Gestión de Casos** en todos los tribunales del país, y se ha reconfigurado el subsistema de información e-File<sup>58</sup>. Se ha dotado a todos los tribunales de equipos técnicos y la nueva solución informática contribuirá a evitar los múltiples desplazamientos al tribunal para presentar y recibir documentos y realizar otras actividades relacionadas con la organización de las audiencias, por lo que las partes solo tendrán que comparecer ante el juez para el examen del caso.

52. A fin de regular el empleo de las teleconferencias, se ha aprobado el Reglamento sobre la realización de audiencias judiciales mediante teleconferencias en tribunales e instituciones penitenciarias piloto<sup>59</sup>.

53. En 2018 se aprobaron modificaciones legislativas para agilizar el **mecanismo de rendición de cuentas de los jueces**<sup>60</sup>.

54. Se ha preparado un proyecto de ley para modificar la Constitución de la República de Moldova (arts. 116, 121 y 122), con el fin de **limitar la inmunidad de los jueces**, normalizar la designación de los jueces, anular el período inicial de cinco años en la designación de los jueces y modificar la composición del Consejo Superior de la Magistratura<sup>61</sup>.

55. Se han promovido una serie de medidas en el sector judicial cuya aplicación contribuirá directamente a **combatir la corrupción**. El “paquete de integridad”<sup>62</sup> creó un marco legal para racionalizar la labor de la Autoridad Nacional de Fomento de la Integridad y reforzar su independencia institucional y en materia de funcionamiento, así como para reformar el actual mecanismo de declaración de ingresos, propiedades, intereses personales y conflictos de intereses. Además, se ha unificado el marco jurídico en lo tocante a la lucha contra la corrupción y se ha creado la **Agencia de Recuperación de Activos Producto del Delito**. Se ha aprobado la Ley de Prevención y Lucha contra el Blanqueo de Capitales y la Financiación del Terrorismo<sup>63</sup>.

### **Combatir la tortura y los malos tratos y asegurar unas condiciones de reclusión adecuadas (121.28, 121.29, 121.74, 121.68, 121.75, 121.77, 121.79, 121.78, 121.80, 121.76, 122.26, 121.81, 121.82, 121.84)**

56. El compromiso del Estado de mejorar las condiciones de reclusión se refleja en una serie de documentos de políticas de ámbito nacional y sectorial<sup>64</sup>.

57. La cantidad de fondos asignados al mantenimiento y las reparaciones más importantes en las instituciones penitenciarias y los centros de detención temporal de la policía ha aumentado gradualmente. **Se han renovado 15 centros de detención temporal<sup>65</sup>** y se han tomado otras medidas para mejorar las condiciones de las personas detenidas bajo custodia policial. Se han completado las obras de reconstrucción de dos instituciones penitenciarias: el Centro Penitenciario núm. 3, en la ciudad de Leova, y el Centro Penitenciario núm. 10 de la localidad de Goian, en el municipio de Chisinau. Además, se están realizando obras de construcción en el centro de detención de Balti, y se ha preparado la documentación y las estimaciones del proyecto del centro penitenciario de Chisinau, cuyas obras comenzarán en 2021. Se han realizado reparaciones ordinarias **en los 18 centros penitenciarios del país.**

58. La atención médica en los centros de detención sigue siendo un reto. La creación de una unidad que gestione los servicios de atención de la salud para los detenidos es el objetivo principal y uno de los elementos fundamentales de la **Estrategia de Desarrollo del Sistema Penitenciario 2016-2020<sup>66</sup>**. Actualmente, se está ultimando un modelo óptimo que implica la creación de una subdivisión dependiente del Ministerio de Justicia<sup>67</sup>. Al mismo tiempo, en 2019 se inició el proceso de acreditación de los servicios médicos en el sistema de administración penitenciaria<sup>68</sup>.

59. Con el fin de establecer un **sistema progresivo de ejecución de las penas<sup>69</sup>**, se ha preparado un proyecto de ley para sustituir el sistema actual, basado en distintos tipos de centros penitenciarios, por uno basado en distintos regímenes de ejecución de las penas, en centros penitenciarios que se diferenciarán por las restricciones impuestas, las medidas de seguridad aplicables, las actividades disponibles, la libertad de movimiento y otras medidas.

60. En 2018 se modificó el Código Penal<sup>70</sup> con objeto de reforzar el marco legislativo de **lucha contra la tortura y los malos tratos**, especialmente en lo que respecta a aplicar sanciones por la comisión de malos tratos que tengan un efecto disuasorio, y se ha suprimido la posibilidad de aplicar una multa como sanción alternativa cuando se trate del delito de comisión de tratos inhumanos o degradantes.

61. El legislador buscaba un mismo objetivo al aprobar una serie de modificaciones en el Código Penal, el Código de Procedimiento Penal, el Código de Ejecución Penal y el Código de Contravenciones<sup>71</sup>, que consistieron en: reducir la población penitenciaria aumentando el papel de los tribunales en la individualización de las penas; eliminar el aumento matemático de la pena de los reincidentes y en los casos de reincidencia en delitos menores; agilizar (desbloquear) el mecanismo de libertad anticipada; establecer un nuevo mecanismo que permite que los tribunales individualicen la ejecución de las penas, con la posibilidad de dictar sentencias en las que una parte de la pena deba cumplirse en un centro penitenciario y otra parte fuera de prisión. Esas mismas modificaciones establecieron, como novedad, un **mecanismo preventivo y compensatorio, en consonancia con las normas del Tribunal Europeo de Derechos Humanos**, en relación con la reclusión de detenidos y condenados en condiciones inhumanas y degradantes<sup>72</sup>. La aplicación de esas modificaciones permitió eliminar los bloqueos procesales que daban lugar al hacinamiento en los centros penitenciarios<sup>73</sup>.

62. Además, otras modificaciones en el Código de Procedimiento Penal<sup>74</sup> realizadas en 2018 ampliaron el conjunto de personas del sistema penitenciario que tienen derecho a investigar los delitos cometidos en los lugares de detención, durante las escoltas policiales o en relación con la ejecución de las sentencias condenatorias.

63. También se ha modificado el Código de Procedimiento Penal con el fin de **erradicar la aplicación abusiva de la prisión preventiva<sup>75</sup>**.

64. Se ha ejecutado el **Plan de Acción para Reducir los Malos Tratos, los Abusos y la Discriminación de las Personas bajo Custodia Policial 2017-2020<sup>76</sup>**, adoptando medidas para erradicar todas las formas de malos tratos, abusos y discriminación en las actividades policiales.

65. En el período 2017-2020, se han desplegado todos los esfuerzos posibles para asegurar un elevado nivel de formación de los fiscales y jueces en materia de prevención y lucha contra la tortura, de acuerdo con las normas del Protocolo de Estambul y la jurisprudencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos<sup>77</sup>.

66. El Consejo para la Prevención de la Tortura<sup>78</sup> protege a las personas contra la tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes, funcionando como mecanismo nacional de prevención de la tortura<sup>79</sup>. Además de la tarea de realizar visitas de prevención y supervisión, los miembros de este Consejo participan en la formación de los empleados de diversas instituciones, en cumplimiento del mandato establecido en el Protocolo Facultativo de la Convención contra la Tortura, y mantienen un diálogo constante con las autoridades a fin de mejorar el respeto de los derechos humanos y las libertades fundamentales de los detenidos.

**Prevención y lucha contra la trata de personas y la violencia doméstica (121.109, 121.110, 121.111, 121.112, 121.114, 121.115, 121.128, 121.113, 121.116, 121.108, 121.88, 121.90, 121.91, 121.93, 121.94, 121.95, 121.98, 121.99, 121.117)**

67. **La prevención y la lucha contra la trata de personas** sigue siendo una prioridad para la República de Moldova. De 2016 a 2020 se ha reforzado el marco de políticas, normativo e institucional, así como la capacidad del personal especializado en esta esfera, y todas las actividades se han realizado sobre la base de cuatro pilares: prevención, protección, sanción y colaboración. El país ha aprobado la **Estrategia Nacional de Prevención y Lucha contra la Trata de Personas 2018-2023<sup>80</sup>** y el Plan de Acción 2018-2020<sup>81</sup> a fin de implementar dicha estrategia, cuyo propósito es crear un sistema nacional sostenible para prevenir y combatir la trata de personas.

68. El Comité Nacional de Lucha contra la Trata de Personas asegura la coordinación de las actividades de prevención y lucha contra la trata de personas, así como la cooperación con las autoridades públicas, las organizaciones internacionales y las organizaciones no gubernamentales, otros organismos y los representantes de la sociedad civil. En el período 2017-2020 dicho Comité ha celebrado siete reuniones.

69. Se han aprobado modificaciones del Código Penal<sup>82</sup>, como la tipificación de nuevas formas de trata de personas, y se ha completado la Ley de Prevención y Lucha contra la Trata de Personas<sup>83</sup> con definiciones más precisas sobre las víctimas y el sistema de remisión<sup>84</sup>.

70. En 2018 y 2020<sup>85</sup> se introdujeron modificaciones en el Reglamento de la Repatriación de Niños y Adultos Víctimas de la Trata de Personas, Personas en Situaciones Difíciles y Niños no Acompañados a fin de **mejorar el mecanismo de repatriación de las víctimas de la trata de personas<sup>86</sup>** y las personas en situaciones difíciles, sobre la base de establecer claramente el proceso de identificación de las personas en situaciones difíciles y el contenido del expediente de repatriación, facilitar el proceso de documentación de los niños no acompañados (identificados en el extranjero) mediante certificados de nacimiento, y planificar los fondos necesarios para que las autoridades de las administraciones públicas locales se hagan cargo de los beneficiarios tras el procedimiento de repatriación.

71. Se ha aprobado la **Ley de Rehabilitación de las Víctimas de Delitos<sup>87</sup>**, que otorga a las víctimas (también a las víctimas de la trata de personas) el derecho de beneficiarse de los servicios de apoyo ofrecidos por el Estado: asesoramiento informativo, asesoramiento psicológico, asistencia jurídica garantizada por el Estado e indemnizaciones económicas.

72. Se han preparado el proyecto de **Programa para la Creación y el Desarrollo del Mecanismo Nacional de Remisión para Proteger y Prestar Asistencia a las Víctimas de Delitos 2021-2025** y el **plan de acción 2021-2023 correspondiente a su aplicación**, a fin de seguir eliminando los obstáculos para hacer efectivos los derechos de las víctimas de la trata y otros delitos, mejorar la eficacia de la cooperación intersectorial en esta esfera y adaptar el Sistema Nacional de Remisión a los cambios que se han producido en la sociedad y en las políticas públicas.

73. Se ha establecido una nueva forma de regular la **actividad de las agencias de empleo privadas**. Así pues, se han establecido nuevas condiciones para la concesión de licencias, que sirven de filtro a la hora de autorizar a los agentes económicos que tienen el propósito de realizar contrataciones laborales. Además, se ha establecido un mecanismo de supervisión y

control, asignando a la Inspección del Trabajo del Estado responsabilidades de control en el ámbito de la intermediación laboral mediante agencias privadas.

74. Se ha modificado la Ley de Asistencia Jurídica Garantizada por el Estado<sup>88</sup> a fin de conceder el derecho a contar con asistencia jurídica cualificada a las víctimas de la trata de personas, con independencia de sus ingresos.

75. En el período 2017-2020 se ha impartido formación a más de 4.250 especialistas en la aplicación de la ley (asistentes sociales, abogados, inspectores de trabajo y otros especialistas).

76. Se ha puesto a prueba y se ha establecido la **especialización de los jueces en la lucha contra la trata de personas** y delitos conexos<sup>89</sup>.

77. La asistencia y protección de las víctimas de la trata de personas implica la prestación de una amplia gama de servicios destinados a prevenir y reducir las consecuencias de la trata o a rehabilitar a las víctimas, que se prestan en **siete centros especializados** (financiados con cargo al presupuesto del Estado) por parte de especialistas que trabajan en equipos multidisciplinares territoriales<sup>90</sup>. En 2016-2020, los centros que prestan servicios sociales especializados (financiados con cargo al presupuesto del Estado) prestaron asistencia a **378 víctimas de la trata de personas** (294 adultos y 84 niños). En 2020 se creó un *servicio especializado para hombres víctimas de la trata de personas*.

78. Un instrumento eficaz para prevenir la trata de personas son las campañas de información pública sobre la migración segura, los empleos legales, y los servicios de protección y asistencia disponibles en el país y en el extranjero, y sobre los riesgos y las consecuencias de la trata de personas<sup>91</sup>.

79. En el ámbito de la cooperación internacional, se han creado **equipos de investigación conjunta** con las autoridades competentes de Rumanía en 2018, con Francia en 2019, y con Francia y Rumanía en 2020, en el contexto de las causas penales relacionadas con la trata de personas y delitos conexos.

80. Se han introducido modificaciones en el Código Penal, el Código de Contravenciones y otros instrumentos legislativos con el propósito de mejorar los mecanismos de prevención y sanción de los actos de **violencia doméstica**<sup>92</sup>.

81. Se han elaborado dos informes para analizar la compatibilidad de la legislación nacional con el Convenio de Estambul y el Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional. Sobre la base de esos dos informes, se prepararon tres proyectos de ley y se aprobaron dos leyes que aseguran parcialmente la armonización de la legislación nacional con las disposiciones internacionales pertinentes<sup>93</sup>.

82. La firma del Convenio de Estambul, el 6 de febrero de 2017, evidenció el compromiso del Gobierno de iniciar el proceso de ratificación y armonizar la legislación nacional con dicho instrumento.

83. Se ha aprobado el primer documento de políticas públicas en esta materia, la Estrategia Nacional para Prevenir y Combatir la Violencia contra las Mujeres y la Violencia Doméstica 2018-2023 y el Plan de Acción 2018-2020<sup>94</sup>. La estrategia se basa en cuatro pilares: prevención, protección, investigación/enjuiciamiento y políticas integradas.

84. En el período 2016-2020, el Consejo de Coordinación Interministerial para la Prevención y la Lucha contra la Violencia Doméstica ha celebrado 21 reuniones, con objeto de asegurar la cooperación y la coordinación entre los ministerios, otras autoridades administrativas centrales y las organizaciones no gubernamentales que tienen competencias en el ámbito de la prevención y la lucha contra la violencia doméstica.

85. Junto con las medidas de carácter legislativo, también se han desplegado esfuerzos para racionalizar los mecanismos prácticos a fin de dar respuesta a los casos de violencia doméstica en los ámbitos del orden público, la atención médica y la asistencia social, lo que ha dado lugar a la aprobación de la *Instrucción Metodológica sobre la Intervención Policial en la Resolución de Casos de Violencia Doméstica*<sup>95</sup>, la *Instrucción sobre la Intervención de las Estructuras Territoriales de Asistencia Social en los Casos de Violencia Doméstica*<sup>96</sup> y la

*Instrucción sobre la Intervención de las Instituciones Médicas en los Casos de Violencia Doméstica<sup>97</sup>.*

86. Por medio de la plataforma nacional del Centro de Asistencia y Protección, en el período 2017-2020<sup>98</sup> se ha prestado asistencia a 550 víctimas (adultas) de la violencia doméstica y a 163 niños. Se han abierto dos nuevos centros en zonas rurales (en Anenii Noi y en la Unidad Territorial Autónoma de Gagauzia).

87. El 9 de diciembre de 2019 se puso en marcha el sitio web <http://antiviolenta.gov.md/ru/>, que ofrece una plataforma de información dedicada a prevenir y combatir la violencia contra las mujeres y la violencia doméstica, a fin de mejorar el acceso a la información sobre el mecanismo de resolución de casos de violencia doméstica y la infraestructura de servicios sociales para las víctimas de la violencia doméstica.

88. Desde diciembre de 2017 el Estado financia el Servicio de Atención Telefónica Gratuita para las Víctimas de la Violencia Doméstica y la Violencia contra las Mujeres<sup>99</sup>.

89. Los órganos encargados de hacer cumplir la ley han asegurado la protección de las víctimas de la violencia doméstica y han supervisado la ejecución de las medidas de protección aplicadas de acuerdo con la ley<sup>100</sup>.

90. En los planes de formación de los fiscales y los jueces impartidos por el Instituto Nacional de Justicia se ha incluido el tema de la violencia contra las mujeres y el de la violencia doméstica<sup>101</sup>.

91. Se organiza anualmente la campaña *16 Días de Activismo contra la Violencia de Género* promovida por las Naciones Unidas, con fines de concienciación. En el contexto de las campañas nacionales, se han organizado 10.200 actividades de concienciación e información, se ha proporcionado información a 500.000 ciudadanos y se han distribuido aproximadamente 310.000 folletos.

**Derechos económicos y sociales (121.151, 121.148, 121.149, 121.150, 121.152, 121.147, 122.29, 121.83, 122.19)**

92. Con el fin de mejorar la calidad de vida de la población de la República de Moldova, el Gobierno aprobó y envió al Parlamento para su examen y aprobación la Estrategia Nacional de Desarrollo “Moldova 2030”<sup>102</sup>, que es un documento de referencia para las estrategias sectoriales y las intervenciones en materia de políticas, actuales y futuras, cuyo objeto es cambiar la perspectiva de las políticas públicas en el país, centrándose en los problemas, los intereses y las aspiraciones de la población<sup>103</sup>.

93. Con el propósito de mejorar el clima económico y, en consecuencia, contribuir al desarrollo económico, el Gobierno ha reformado los organismos que tienen competencias de control institucional y procedimental, y ha aprobado una serie de reglamentos relativos al control estatal de la actividad empresarial<sup>104</sup>. Se ha puesto en funcionamiento un sistema automatizado de información para la gestión y expedición de documentos de autorización<sup>105</sup>.

94. Se ha puesto en marcha el Programa para Atraer Remesas a la Economía “PARE 1+1” 2018-2020<sup>106</sup>, a fin de estimular que los migrantes que han regresado emprendan negocios en el país, de modo que se movilicen los recursos humanos y financieros de los trabajadores migrantes y sus familiares en el desarrollo económico sostenible de la República de Moldova. Se ha ajustado la normativa legal, incluyendo el concepto y la definición de “emprendimiento social”, “empresa social” y “empresa social de inserción”, y estableciendo quiénes pueden obtener el estatus de empresa social o empresa social de inserción. Se ha aprobado un nuevo “programa START para jóvenes: un negocio sostenible en casa”<sup>107</sup>, destinado a integrar a los jóvenes en el circuito económico sobre la base de facilitar la puesta en marcha y el desarrollo de empresas sostenibles. Se ha ampliado la Red de Incubadoras de Empresas de la República de Moldova<sup>108</sup>, a fin de alentar el desarrollo de las pymes en las regiones, la creación de servicios regionales de apoyo al desarrollo empresarial y la gestión de proyectos de innovación y transferencia de tecnología. Como respuesta rápida a la situación creada por la crisis pandémica en 2020, se han puesto en marcha *cinco nuevos instrumentos para aumentar la competitividad de las pymes y reforzar*

*la infraestructura en las regiones*, que son: el Programa de Ecologización de las Pymes (10 millones de lei); el Programa de Apoyo a las Empresas con un Elevado Potencial de Crecimiento e Internacionalización (15 millones de lei); el Programa Piloto para la Creación de Plataformas Industriales Multifuncionales (50 millones de lei); el instrumento para la digitalización de las pymes (10 millones de lei); y el instrumento de apoyo al desarrollo de la Red de Incubadoras de Empresas (2,2 millones de lei)<sup>109</sup>. En 2020, se crearon y se mantuvieron 4.549 puestos de trabajo mediante los programas de financiación de las pymes.

95. Se han tomado **una serie de medidas** para **reducir la pobreza** y promover la **inclusión social** de las personas pertenecientes a grupos desfavorecidos. Se han creado redes de servicios sociales multifuncionales que han contribuido a mejorar el acceso de los grupos desfavorecidos a los servicios pertinentes basados en las necesidades. Se han realizado esfuerzos para agilizar el acceso a la vivienda mediante la puesta en marcha de los programas “Primera Vivienda” y una serie de proyectos destinados a financiar viviendas sociales para familias vulnerables.

96. Los **indicadores de pobreza**, tanto internacionales<sup>110</sup> como nacionales<sup>111</sup>, muestran una tendencia a la baja.

97. Se ha aprobado un reglamento sobre la concesión de subvenciones del Fondo Nacional para el Desarrollo de la Agricultura y las Zonas Rurales a fin de mejorar las condiciones de vida y de trabajo en las zonas rurales<sup>112</sup>.

98. Se han tomado medidas para armonizar el marco normativo nacional con las directivas de la Unión Europea sobre la **calidad del agua destinada al consumo humano**. Se ha aprobado la Ley de la Calidad del Agua Potable<sup>113</sup>, creando así el marco legislativo para la protección, el control y el uso eficiente del agua potable, y para gestionar mejor los riesgos relacionados con el agua en la República de Moldova<sup>114</sup>. Se ha puesto en marcha el **Programa Nacional de Aplicación del Protocolo sobre Agua y Salud** en la República de Moldova para 2016-2025<sup>115</sup>. Se han aplicado las disposiciones del Reglamento Sanitario sobre los Pequeños Sistemas de Abastecimiento de Agua Potable<sup>116</sup>.

99. Se ha aprobado la **Estrategia Nacional de Empleo 2017-2021**<sup>117</sup> y la matriz de acción para su implementación. Su objetivo general es aumentar el nivel de empleo en el sector formal sobre la base de la competitividad económica y unas competencias y cualificaciones adecuadas, en condiciones de desarrollo sostenible e inclusivo.

100. Se han aprobado la **Ley del Fomento del Empleo y el Seguro de Desempleo**<sup>118</sup> y la Decisión del Gobierno sobre las Medidas de Acceso al Empleo<sup>119</sup>, con objeto de prevenir y reducir el desempleo y sus efectos sociales, disminuir el riesgo de desempleo y asegurar un alto nivel de empleo y de adaptación de la fuerza de trabajo, prohibiendo toda forma de discriminación basada en la raza, la nacionalidad, el origen étnico, el idioma, la religión, las creencias, el sexo, la edad, la discapacidad, la opinión, la afiliación política, la riqueza, el origen social o cualquier otro criterio, a fin de asegurar el derecho a un trabajo digno.

101. En el contexto de la pandemia causada por la **COVID-19**, se han adoptado las siguientes **medidas de protección social**:

- Se han concedido prestaciones de desempleo a las personas que perdieron su puesto de trabajo debido a la pandemia<sup>120</sup>.
- Se han regulado las condiciones del trabajo a distancia.
- Se han tomado medidas para prestar apoyo a los pensionistas y a las personas con discapacidad<sup>121</sup>.
- Se ha proporcionado apoyo a las familias desfavorecidas<sup>122</sup>.
- Los descendientes (cónyuge supérstite, hijos o, según el caso, alguno de los progenitores) de los perceptores de ingresos fallecidos a causa de la infección por COVID-19 durante el ejercicio de la actividad médica pueden solicitar un subsidio mensual<sup>123</sup>.

102. Se ha ejecutado el **Programa Nacional de Promoción de la Salud 2016-2020**<sup>124</sup>. Las principales actuaciones llevadas a cabo en el marco de este Programa están relacionadas con el fortalecimiento de la capacidad de los especialistas sanitarios<sup>125</sup>.

103. A fin de proporcionar a la población los medicamentos de alta calidad necesarios, se han adoptado las siguientes medidas:

- Se ha aprobado el Reglamento sobre la Realización de Actividades de Farmacovigilancia<sup>126</sup>.
- Se ha revisado el marco normativo de los medicamentos reembolsados<sup>127</sup>.
- La Organización Mundial de la Salud (OMS) ha examinado el proyecto de la nueva ley de medicamentos, que se terminará, se someterá a la opinión de los expertos y se remitirá al Gobierno para su aprobación.

104. La **tasa de natalidad** registrada en la República de Moldova en 2019 fue de 12,0 nacidos vivos por cada 1.000 habitantes, siendo la más baja de los últimos cinco años<sup>128</sup>.

105. Se ha aprobado el **Programa Nacional de Salud y Derechos Sexuales y Reproductivos 2018-2022**<sup>129</sup>, que es un documento de políticas fundamental sobre las intervenciones de ámbito nacional en relación con el acceso a servicios seguros de salud sexual y reproductiva y el respeto de los derechos humanos, en particular los derechos sexuales y reproductivos y la igualdad de género. Este documento estratégico abarca a todos los grupos, prestando especial atención a los grupos vulnerables, incluidas las personas con discapacidad. En los últimos cuatro años, los **indicadores de la salud sexual y reproductiva de los adolescentes y los jóvenes han mostrado tendencias positivas**<sup>130</sup>.

106. En los últimos años los indicadores de salud de los adolescentes y los jóvenes evidencian algunos avances. En ese contexto, cabe mencionar una serie de **tendencias positivas** en la salud de este grupo de la población<sup>131</sup>. Al mismo tiempo se han producido algunas tendencias preocupantes, que requieren mayores esfuerzos, como la incidencia del VIH entre los jóvenes de 15 a 24 años y la reducción del uso de protección entre los adolescentes de 15 a 17 años sexualmente activos<sup>132</sup>.

107. Se ha continuado ejecutando el **Programa Nacional de Immunización**. El nivel de la cobertura de vacunación en el grupo etario destinatario de 1 año de edad es de aproximadamente el 90 %, mientras que el objetivo es el 95 %, y esa diferencia se debe al rechazo de los progenitores a la vacunación por razones religiosas, filosóficas o de desconfianza en las vacunas, inspiradas en la tendencia contraria a las vacunas.

108. Con el fin de reducir la morbilidad por enfermedades transmisibles, se han aprobado y puesto en práctica el **Programa Nacional de Prevención y Control del VIH/Sida y las Infecciones de Transmisión Sexual 2016-2020**<sup>133</sup>, el **Programa Nacional de Control de las Hepatitis Virales B, C y D 2017-2021**<sup>134</sup> y el **Programa Nacional de Control de la Tuberculosis 2016-2020**<sup>135</sup>.

109. Se han aprobado y puesto en práctica el **Programa Nacional de Prevención y Control de la Diabetes 2017-2021** y el plan de acción correspondiente a su aplicación<sup>136</sup>.

110. Tras la aplicación de los programas de salud, la **esperanza de vida al nacer** en la República de Moldova ha aumentado, pasando de los 69,3 años en 2014 a los 70,9 años en 2019 para el conjunto de la población, siendo de 75,1 años en el caso de las mujeres y de 66,8 años en el de los hombres.

111. En la República de Moldova hay actualmente **40 centros comunitarios de salud mental**<sup>137</sup>, ubicados en los centros de los distritos y en los municipios de Chisinau y Balti, y financiados con los fondos del seguro médico obligatorio.

112. En el contexto de la pandemia, la República de Moldova ha tomado las siguientes **medidas para dar respuesta a la infección por COVID-19**<sup>138</sup>:

- Convocatoria y funcionamiento, desde febrero de 2020, de la Comisión Nacional Extraordinaria de Salud Pública, responsable de la implementación de la prevención ante el COVID-19 y la gestión de la respuesta.
- Convocatoria diaria de la Comisión para Situaciones Extraordinarias y Emergencias de Salud Pública<sup>139</sup> a fin de analizar la situación epidemiológica diaria, presentar los datos actualizados y los problemas, e identificar soluciones adecuadas.

- Elaboración del **Plan Nacional de Preparación y Respuesta ante la Infección por Coronavirus de Nuevo Tipo**, en colaboración con la OMS<sup>140</sup>; después de evaluar los acontecimientos epidemiológicos en todo el mundo, se elaboró la segunda versión de dicho Plan<sup>141</sup>.
- Establecimiento, el 26 de febrero, del Grupo Nacional de Comunicación de Riesgos para la Salud Pública, del que forman parte responsables de comunicación de todas las instituciones públicas importantes, la OMS y otros organismos de las Naciones Unidas.
- Aprobación y actualización periódica de los **Protocolos Clínicos para el Tratamiento de la Infección por COVID-19**, esto es, cuatro versiones consecutivas del Protocolo Clínico Nacional Provisional – “Infección por coronavirus de nuevo tipo” y la Guía Práctica – “Gestión de las complicaciones graves debidas a la infección por coronavirus de nuevo tipo”, en los que se basan las actividades médicas y sanitarias de atención urgente, primaria y hospitalaria, incluido el suministro de medicamentos y el tratamiento en unidades de cuidados intensivos.
- Las pruebas, la investigación, la consulta y el tratamiento de las personas infectadas por COVID-19 (o sospechosas de ello) en las instituciones médicas públicas están **totalmente cubiertos** por fuentes provenientes de los fondos del seguro médico obligatorio, de modo que esos servicios son gratuitos para todos los ciudadanos de la República de Moldova, con independencia de si están o no asegurados.
- Las categorías de pacientes a los que se presta tratamiento ambulatorio (formas leves, formas moderadas, neumonías leves) se han ido ampliando por etapas y, a partir de diciembre de 2020, se aprobó el tratamiento a domicilio para los pacientes de COVID-19 (formas moderadas y neumonías leves) compensado con los fondos del seguro de médico obligatorio.
- A fin de estimular al personal médico que participó de forma directa en la lucha contra la COVID-19, se aprobó una bonificación salarial por el cumplimiento del indicador de desempeño profesional “prestación de asistencia médica a pacientes con COVID-19”<sup>142</sup>.
- Por iniciativa del Gobierno, se ha puesto en marcha un proyecto con financiación del Banco de Desarrollo del Consejo de Europa mediante el que se han asignado 40 millones de euros al sistema de salud, que se destinarán a reforzar la capacidad del sistema para dar respuesta a la pandemia de COVID-19, mediante el equipamiento de los hospitales con generadores de oxígeno, tomógrafos computarizados, sistemas de gestión de residuos médicos, dispositivos de esterilización de alta capacidad y la reconfiguración de los sistemas de ventilación de las unidades de cuidados intensivos de los hospitales de ámbito estatal, municipal y de distrito.
- Se ha aprobado el **Plan de Vacunación contra la COVID-19**<sup>143</sup>.

### **Derechos de las mujeres e igualdad de género (121.56, 121.40, 121.47, 121.48, 121.49, 121.50, 121.53, 121.54, 121.52, 121.46, 121.58, 121.59, 121.57, 121.51, 121.145, 121.146)**

113. A fin de garantizar el **respeto de los derechos de las mujeres** y la igualdad de género, la República de Moldova ha aprobado la *Estrategia para Asegurar la Igualdad entre las Mujeres y los Hombres 2017-2021*<sup>144</sup> y otros documentos de políticas en ámbitos conexos<sup>145</sup>. La Estrategia incluye diez esferas de intervención: la participación de las mujeres en la adopción de decisiones; el mercado de trabajo y la brecha salarial de género; la protección social y las políticas relativas a la familia; la salud; la educación; el cambio climático; el mecanismo institucional; los estereotipos sociales y la comunicación no violenta; la igualdad de género en el sector de la seguridad y la defensa; y la presupuestación con perspectiva de género<sup>146</sup>.

114. Asimismo, se ha mejorado el marco normativo relativo a la igualdad entre las mujeres y los hombres, y a la prevención y la lucha contra la violencia doméstica y la trata de

personas, de acuerdo con las normas internacionales<sup>147</sup>. Además, se ha desarrollado el sistema de datos estadísticos con perspectiva de género y se han tomado medidas para realizar el seguimiento de las políticas aplicadas.

115. Se ha aprobado el **Plan de Acción 2018-2021 correspondiente al Programa Nacional de Aplicación de la Resolución 1325 del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, relativa a las Mujeres y la Paz y la Seguridad**<sup>148</sup>, con objeto de asegurar el respeto de los derechos de las mujeres y reforzar su papel en el sector de la seguridad, eliminando los estereotipos y la violencia contra las mujeres, haciendo que participen en los procesos de prevención y resolución de conflictos, así como en la reconstrucción posterior a los conflictos, incorporando la perspectiva de género en las operaciones de paz, y ampliando el papel y la contribución de las mujeres, en particular entre los observadores militares, la policía civil y el personal de derechos humanos y humanitario.

116. De acuerdo con dicho Plan, se ha establecido el objetivo de respetar el principio de la igualdad de género en los procedimientos de contratación y promoción de la policía, y aumentar la participación de las mujeres en ese cuerpo. En ese sentido, en el marco del programa de la Unión Europea “Apoyo a la Reforma de la Policía en la República de Moldova 2017-2020”, se aprobó un plan de acción para aumentar la proporción y el papel de las mujeres en la policía, con el propósito de que el porcentaje de mujeres alcanzara como mínimo el 20 % en 2020<sup>149</sup>. En 2020, el Ministerio del Interior y el Ministerio de Defensa aprobaron el Reglamento para prevenir, combatir y denunciar los casos de discriminación por razón de sexo, acoso y acoso sexual.

117. Se ha elaborado el Informe de seguimiento de la cuota de género en los partidos políticos de la República de Moldova<sup>150</sup> y se ha realizado el estudio “*Barómetro de Género: ¿Cómo participan las mujeres y los hombres en la política y en los procesos de toma de decisiones?*”<sup>151</sup>.

118. Todos los años se organizan campañas de concienciación y promoción de la igualdad de género a nivel nacional, en las que participan especialmente los medios de comunicación<sup>152</sup>.

119. Se han organizado programas, actividades formativas, tutorías y sesiones de **fomento de la capacidad para mujeres de grupos insuficientemente representados** (entre ellas mujeres con discapacidad y mujeres romaníes). Se han celebrado nueve foros regionales bajo los auspicios de la Plataforma de Mujeres Parlamentarias, con el lema “Prevención y eliminación de la violencia doméstica y la violencia en las escuelas: un enfoque multidisciplinar del fenómeno”. Se han ejecutado el Programa Nacional de Tutoría para Mujeres Activas “INSPiR-O!” (“Inspírala”) y el Programa de Fomento de la Capacidad para Mujeres que son Alcaldesas por Primera Vez, mediante los que se impartió capacitación a las participantes sobre temas tales como la igualdad de género, las mujeres en puestos directivos, la presupuestación con perspectiva de género, la comunicación y la prevención del sexismoy el lenguaje sexista. En 2018 se organizó la campaña nacional “¡Preséntate a las elecciones! ¡Sé el cambio！”, en la que participaron candidatos que se presentaban a las elecciones locales de 2019.

120. Se ha preparado el plan de estudios de la asignatura optativa “Relaciones familiares armoniosas” y se ha formado a los docentes a ese respecto<sup>153</sup>. El plan de estudios de la clase dedicada a la orientación impartida por los directores (en los grados 1º a 12º) incluye un módulo titulado “Cultura del comportamiento ético” que trata la cuestión de los roles y los estereotipos de género.

121. El período de ejecución del **Programa Piloto “Mujeres en la Empresa”**<sup>154</sup> se ha ampliado hasta 2022, con objeto de promover las competencias económicas y sociales en las zonas rurales mediante la reducción de la desigualdad de género, el crecimiento y el desarrollo de las empresas, el cambio de la percepción ante la innovación y un mayor acceso a los recursos, las tecnologías y los servicios modernos.

122. Con el fin de crear condiciones favorables para el acceso de las mujeres a la política, en 2018 se aprobaron nuevas modificaciones legislativas relativas a la financiación de los partidos políticos con cargo a los presupuestos del Estado, que, entre otras cosas, incluían una distribución de recursos sujeta al cumplimiento de las cuotas de género establecidas<sup>155</sup>.

123. En 2019 se modificó la legislación electoral y se incluyeron disposiciones que requieren que, en las elecciones locales, las listas de candidatos se elaboren con una cuota mínima del 40 % para ambos sexos, y que el orden de los candidatos en las listas respete la fórmula de que haya al menos cuatro candidatos de cada sexo en cada grupo de diez.

124. De febrero a junio de 2019 se puso en marcha el programa “Mujeres Romaníes en la Política”, mediante el que 38 mujeres romaníes participaron en actividades de formación, tutoría y orientación. El proyecto estaba destinado a aumentar el número de mujeres romaníes que participan en los procesos de adopción de decisiones de ámbito local.

125. En 2019 se ejecutó un programa de empoderamiento cívico y político destinado a 50 mujeres con diversos tipos de discapacidad, con el fin de preparar a futuras candidatas para las elecciones locales de 2019.

### **Derechos de los niños (121.41, 121.103, 121.107, 121.104, 121.106, 121.105, 122.27)**

126. Mediante la implementación de los objetivos fijados en la **Estrategia de Protección de la Infancia 2014-2020** y el Plan de Acción 2016-2020 se han realizado esfuerzos para reformar el sistema de atención a la infancia, desarrollar el marco normativo e institucional para establecer servicios alternativos de cuidado en un entorno familiar, asegurar las condiciones necesarias para criar y educar a los niños en un entorno familiar, prevenir la separación de los niños de sus familias, estandarizar y aumentar las prestaciones que se conceden a los niños privados temporalmente de la atención parental y a aquellos que quedan carentes del cuidado parental y son asignados a servicios alternativos de cuidado en un entorno familiar, ajustar esas prestaciones en función de las necesidades especiales de los niños, y motivar económicamente a los asistentes parentales profesionales/progenitores-educadores de los orfanatos de tipo familiar, a fin de asegurar la asignación de más de un niño a una misma familia, la de los niños menores de 3 años y la de los niños con discapacidad.

127. Se ha incrementado la *cuantía de la prestación única por la acogida* de niños en servicios de tutela, las prestaciones para los asistentes parentales profesionales y los progenitores-educadores de los orfanatos de tipo familiar<sup>156</sup>, así como las prestaciones para las familias con hijos<sup>157</sup>. El paquete mínimo de servicios sociales<sup>158</sup> incluye el apoyo a las familias con hijos y la asistencia personal para las personas con discapacidad.

128. Se han desplegado esfuerzos para impulsar el empleo gradual de especialistas en protección de la infancia a nivel comunitario y la creación de una red de **centros regionales de asistencia integrada para los niños víctimas y testigos de delitos**, a fin de simplificar la protección de los niños contra los delitos sexuales, la trata de niños o la violencia doméstica y los delitos contra la vida y/o la salud<sup>159</sup>.

129. En 2019 se realizó una evaluación intermedia de la aplicación de la Estrategia de Protección de la Infancia 2014-2020 y el Plan de Acción 2016-2020<sup>160</sup>.

130. La República de Moldova ha aplicado<sup>161</sup> y evaluado la eficacia<sup>162</sup> de las *Instrucciones sobre el mecanismo de cooperación intersectorial para la identificación, la evaluación, la remisión, la asistencia y el seguimiento de los niños víctimas o posibles víctimas de la violencia, el abandono, la explotación y la trata*<sup>163</sup>, y la *Instrucción sobre el mecanismo de cooperación intersectorial para la prevención primaria de los riesgos para el bienestar infantil*<sup>164</sup>.

131. Las medidas de seguimiento, prevención y lucha contra la violencia infantil en las instituciones educativas se llevan a cabo durante todo el curso escolar. Este tema está incluido en las asignaturas **Educación para la sociedad**, que es obligatoria para los alumnos de enseñanza media y enseñanza secundaria, y **Desarrollo personal**, que se imparte en los grados 1º a 12º, y cuyo contenido *se ha reformulado* en el contexto de la reforma de los planes de estudio.

132. Se ha ejecutado el **Plan de Acción para Promover la Seguridad en Línea de los Niños y los Adolescentes 2017-2020**<sup>165</sup>. Ante la situación impuesta por la COVID-19,

*se preparó un conjunto de instrumentos metodológicos para la organización a distancia del proceso educativo en condiciones de cuarentena, la seguridad en línea y la seguridad de los estudiantes*, que se aplicó en el proceso educativo a distancia de los alumnos de enseñanza primaria, media y secundaria.

133. Se ha continuado con el proceso de **desinstitucionalización de los niños**<sup>166</sup>.

134. Se ha puesto en marcha el **Servicio de Intervención en la Primera Infancia**<sup>167</sup>, a fin de prevenir y minimizar las consecuencias negativas para el desarrollo y la salud de los niños de corta edad.

135. Tras la aplicación del **Programa para el Desarrollo de la Educación Inclusiva en la República de Moldova 2011-2020**, existen 932 centros de recursos para la educación inclusiva en las instituciones educativas. Además, se ha puesto en marcha el Programa Piloto de Educación Inclusiva para la Formación Profesional en nueve instituciones, y se han reconstruido diez centros de excelencia, entre otras cosas con el fin de asegurar el acceso y las condiciones necesarias para que los estudiantes con necesidades especiales puedan cursar la formación profesional.

136. La pandemia ha afectado profundamente al sistema educativo de la República de Moldova<sup>168</sup>. El Gobierno ha tomado una serie de medidas para que los docentes y los estudiantes cuenten con dispositivos informáticos, pero asegurar el pleno acceso a la educación sigue representando un desafío<sup>169</sup>.

### **Derechos de las personas con discapacidad (121.159, 121.154, 121.158, 121.160, 121.162, 121.161, 122.30, 121.155, 121.155, 121.156, 121.157)**

137. Se ha modificado la legislación<sup>170</sup> y 49 instrumentos normativos<sup>171</sup> a fin de poner en consonancia las disposiciones normativas vigentes con la **Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad** de las Naciones Unidas.

138. En 2018 se modificaron los **artículos 50 y 51 de la Constitución de la República de Moldova** para sustituir la expresión “personas minusválidas” por “personas con discapacidad”.

139. Se ha aprobado el **Programa Nacional para la Inclusión Social de las Personas con Discapacidad 2017-2022** y el plan de acción correspondiente a su aplicación<sup>172</sup>. El Programa prevé un enfoque intersectorial para la inclusión social de las personas con discapacidad y para asegurar que sus derechos fundamentales se respeten por igual en todos los ámbitos de la vida social<sup>173</sup>.

140. El Gobierno ha aprobado el **Programa Nacional de Desinstitucionalización de las Personas con Discapacidad Intelectual y Psicosocial** de las instituciones residenciales gestionadas por el Organismo Nacional de Asistencia Social para el período 2018-2026<sup>174</sup>.

141. En el marco de la reforma del sistema de determinación del grado de discapacidad y de la **transición de un modelo médico a un modelo social de la discapacidad**, el Estado ha continuado ajustándolo mediante la creación de equipos multidisciplinarios de expertos médicos, sociales y educativos, encargados de determinar el grado de discapacidad y de aplicar los criterios médicos y sociales. El Gobierno ha aprobado el *Concepto de reforma del sistema de determinación de la discapacidad en la República de Moldova* y el plan de acción correspondiente a su aplicación<sup>175</sup>, uno de cuyos principales objetivos es adaptar los criterios de determinación de la discapacidad a las normas internacionales, incluida la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad<sup>176</sup>.

142. La **prestación de servicios de asistencia social para las personas con discapacidad** se ha regulado y diversificado mediante la aprobación de los siguientes instrumentos:

- El Reglamento sobre la organización y el funcionamiento del Servicio de Atención Telefónica Gratuita para las personas con discapacidad y las Normas Mínimas de Calidad<sup>177</sup>.

- El Reglamento Marco sobre la organización y el funcionamiento del Servicio Social “Centro de Día para Personas con Discapacidad” y las Normas Mínimas de Calidad<sup>178</sup>.
- El Reglamento Marco sobre la organización y el funcionamiento del Servicio Social “Centro de Día para Personas con Discapacidad” y las Normas Mínimas de Calidad<sup>179</sup>.
- Con el fin de proporcionar asistencia y atención a los niños y adultos con discapacidades graves, con objeto de ayudarles a llevar una vida más independiente en su propio hogar y en la comunidad, se han regulado el servicio social “Asistencia Social”<sup>180</sup>, el servicio social “Respiro”<sup>181</sup> y el servicio social “Acogimiento Familiar para Adultos”<sup>182</sup>.
- A fin de asegurar el derecho de las personas con discapacidad a llevar una vida independiente y en el contexto de su integración en la sociedad, se han elaborado y aprobado reglamentos y normas mínimas de calidad para la organización y el funcionamiento de distintos tipos de servicios sociales<sup>183</sup>.

143. Todos los años el Ministerio de Sanidad, Trabajo y Protección Social prepara y lleva a cabo un plan de acción dedicado al Día Internacional de las Personas con Discapacidad (3 de diciembre), con la participación de las autoridades públicas locales, los organismos internacionales y la sociedad civil. Las actividades se centran en la promoción de los derechos, la inclusión social y las habilidades de las personas con discapacidad. Entre otras actividades, se organizan exposiciones que incluyen la venta de objetos realizados por personas con discapacidad, exposiciones de fotografías realizadas por personas con discapacidad, ruedas de prensa, mesas redondas y competiciones deportivas<sup>184</sup>.

144. Con el fin de apoyar a las autoridades públicas locales en el proceso de creación y desarrollo de los servicios sociales, y para asegurar la funcionalidad de algunos servicios sociales de emergencia, se modificó la legislación<sup>185</sup> en lo tocante, entre otras cosas, a la financiación de un **paquete mínimo de servicios sociales** con recursos del fondo de apoyo a la población por medio del Organismo Nacional de Asistencia Social. Asimismo, algunos servicios y prestaciones sociales se financian por medio del fondo de apoyo a la población, lo que implica una transferencia del presupuesto del Estado a los presupuestos locales.

145. Se han tomado medidas para que las personas con discapacidad y las minorías nacionales tengan **acceso a la educación y a los servicios de atención de la salud, así como a un nivel de vida adecuado**<sup>186</sup>.

146. Con objeto de asegurar la accesibilidad de las personas con discapacidad a las infraestructuras sociales, los proveedores de comunicaciones electrónicas tienen la obligación de garantizar, tanto en las localidades urbanas como en las rurales, la posibilidad de que los usuarios finales con discapacidad puedan elegir y utilizar servicios de calidad, adaptados a sus necesidades y en condiciones equivalentes a las de los demás usuarios finales<sup>187</sup>.

147. En 2020 se revisó y aprobó el **Reglamento nacional sobre el suministro de anticonceptivos a grupos vulnerables en edad reproductiva**<sup>188</sup>. Este incluye 12 grupos<sup>189</sup> que pueden recibir anticonceptivos de manera gratuita, entre los que figuran las personas con discapacidad. Algunos centros de atención primaria de la salud han sido equipados con sillas ginecológicas adaptadas para personas con discapacidades locomotoras. Sin embargo, es necesario realizar esfuerzos adicionales para equipar a todas las instituciones sanitarias y aumentar la capacidad del personal médico en la prestación de servicios de asesoramiento sobre salud reproductiva y planificación familiar para personas con discapacidad, así como para informar a las personas con discapacidad y a sus familias sobre sus derechos sexuales y reproductivos.

### **Respeto de los derechos humanos en la región de Transnistria de la República de Moldova (121.173, 121.174, 121.175)**

148. La situación de los derechos humanos en la región de Transnistria sigue caracterizándose por las graves y sistemáticas violaciones cometidas por las entidades que controlan la región, que afectan al derecho a la libertad y a la seguridad de la persona, el

derecho a la libertad de expresión, el derecho de asociación, el derecho a la libre circulación, el derecho a no ser detenido sin motivo, el derecho a la salud, el derecho a la educación y el derecho a no ser víctima de torturas.

149. El 15 de junio de 2018, tras una pausa de más de cinco años, se reanudó la actividad del grupo de trabajo sobre los derechos humanos; en el **período 2018-2020** se convocaron **seis reuniones** y se incluyó en el orden del día la cuestión de los acuciantes problemas de los habitantes de ambas márgenes del río Nistru. Sin embargo, los representantes de Tiraspol se niegan a debatir algunos casos de gran resonancia y a hallar soluciones al respecto, así como a asegurar el acceso de los funcionarios moldavos, los defensores de los derechos humanos y los representantes de la Oficina del Defensor del Pueblo a las personas cuyos derechos han sido vulnerados en la región.

150. En el proceso de supervisión de los derechos humanos, las autoridades constitucionales mantienen un diálogo permanente con las organizaciones de la sociedad civil<sup>190</sup>, en el que debaten abiertamente diversos aspectos de la cuestión de Transnistria.

151. Con el fin de reforzar el diálogo sobre cuestiones relativas a los derechos humanos, se transmitió al representante político en Tiraspol la propuesta de crear una plataforma de interacción en la que participaran organizaciones no gubernamentales de derechos humanos, periodistas y organizaciones internacionales pertinentes, con el fin de poner de relieve las cuestiones más delicadas relacionadas con la vulneración de los derechos y libertades fundamentales, y hallar soluciones en consonancia con las normas internacionales. La parte de Transnistria no manifestó ninguna reacción a ese respecto.

152. Durante la pandemia la situación de los derechos humanos ha empeorado en lo que atañe a las prácticas abusivas cometidas por Tiraspol: detenciones ilegales y en régimen de incomunicación, secuestros, censura y restricción drástica del derecho a la libre circulación<sup>191</sup>. Esas violaciones han sido puestas en conocimiento de los mediadores y observadores del proceso de negociación, en particular los de la Misión de la OSCE en la República de Moldova. Al mismo tiempo, la República de Moldova plantea sistemáticamente esta cuestión en el Consejo Permanente de la OSCE, las reuniones del Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas y las reuniones del Comité de Ministros del Consejo de Europa.

153. Dado que las autoridades constitucionales no tienen un control efectivo de la situación en la región, ni acceso a esas localidades para ejercer sus poderes legales, todos los casos de vulneración de los derechos fundamentales se comunican a los mediadores y observadores que participan en el proceso de negociación para lograr una solución en Transnistria, a la Misión de la OSCE en la República de Moldova y a la Oficina del Consejo de Europa en Chisinau, con un llamamiento a la intervención para detener las ilegalidades, restablecer/asegurar la protección de los derechos vulnerados, y desalentar la intimidación y las provocaciones emprendidas por los representantes de las estructuras de Transnistria. En particular, la representación territorial de la Oficina del Defensor del Pueblo proporciona el asesoramiento y la asistencia necesarios a los habitantes de las localidades de la orilla izquierda del río Nistru y del municipio de Bender<sup>192</sup>.

154. Al mismo tiempo, la República de Moldova apoya el acceso de los mecanismos internacionales de derechos humanos a la región. En el período que abarca el informe, el país facilitó/aprobó las visitas del Relator Especial sobre cuestiones de las minorías y el Relator Especial sobre la situación de los defensores de los derechos humanos, la visita de seguimiento del experto de las Naciones Unidas sobre la región de Transnistria, Sr. Thomas Hammarberg, así como las visitas del Comisario de Derechos Humanos del Consejo de Europa (el Sr. Nils Muižnieks en octubre de 2017 y la Sra. Dunja Mijatović en marzo de 2020).

#### **IV. Retos y prioridades para el próximo período**

155. Promoción del proyecto de ley para modificar la Constitución de la República de Moldova (arts. 116, 121 y 122), con el fin de *limitar la inmunidad de los jueces, normalizar el procedimiento de designación de los jueces, anular el período inicial de cinco años en la*

*designación de los jueces y modificar la composición del Consejo Superior de la Magistratura.*

156. Aplicación efectiva del **Plan de Acción Nacional de Derechos Humanos 2018-2022**; elaboración y aplicación de un nuevo documento de políticas en el período posterior a 2022.

157. **Ratificación de tratados internacionales** relativos a los derechos humanos:

- Protocolo Facultativo de la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad.
- Protocolo núm. 16 del Convenio Europeo de Derechos Humanos.
- Protocolo Facultativo de la Convención sobre los Derechos del Niño relativo a un procedimiento de comunicaciones.
- Protocolo Facultativo del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales.
- Enmiendas al Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional relativas al crimen de agresión.

158. Funcionamiento adecuado del **Consejo Nacional de Derechos Humanos** en cuanto al seguimiento y la evaluación de la aplicación de los documentos de políticas de derechos humanos, así como de los compromisos/recomendaciones recibidos de los mecanismos internacionales de protección de los derechos humanos.

159. Reforzar el **papel del Defensor del Pueblo y el Consejo de Igualdad**, entre otras cosas mediante la promoción de las modificaciones legislativas pertinentes.

160. Armonizar el marco jurídico nacional con las normas internacionales sobre delitos de odio.

161. La inaccesibilidad de la **región de la orilla izquierda del río Nistru** a fin de que los representantes de las autoridades públicas y los promotores de los derechos humanos ejerzan sus funciones y presten la **asistencia necesaria a las víctimas de vulneraciones de los derechos humanos**, la imposibilidad de aplicar las disposiciones de la legislación nacional, la no resolución del conflicto de Transnistria y la falta de control efectivo por parte de las autoridades constitucionales sobre la situación en la región siguen siendo retos importantes y forman parte de las prioridades fundamentales de las futuras intervenciones del Estado para asegurar el respeto de los derechos humanos.

162. Aplicación de la **nueva estrategia para asegurar la integridad y la independencia del sector judicial correspondiente al período 2021-2024**.

163. Mejorar aún más las **condiciones de reclusión**, en particular mediante una mayor calidad de los servicios médicos, psicosociales y de salud mental, y también mediante una investigación eficaz de las denuncias de malos tratos. Intensificar los esfuerzos para aplicar medidas no privativas de libertad, especialmente en las condiciones impuestas por la pandemia y habida cuenta del grado de vulnerabilidad ante el riesgo de infección que tienen los detenidos en los centros penitenciarios.

164. Mejorar el **mecanismo preventivo y compensatorio, en consonancia con las normas del Tribunal Europeo de Derechos Humanos**, en relación con la reclusión de detenidos y condenados en condiciones inhumanas y degradantes.

165. Reforzar el **sistema nacional de prevención, preparación y respuesta a las emergencias de salud pública**, y proporcionar un acceso igualitario para todos a servicios médicos de calidad.

166. Redoblar los **esfuerzos para erradicar todas las formas de discriminación** contra las minorías nacionales y las categorías desfavorecidas y vulnerables de la población. Aplicar el Plan de Acción 2021-2025 para Promover la Memoria del Holocausto y la Cultura de la Tolerancia a fin de Combatir el Racismo, el Antisemitismo, la Xenofobia y Otras Formas de Intolerancia.

167. Continuar con la adopción de **medidas para aplicar las sentencias del Tribunal Europeo de Derechos Humanos**.

168. Asegurar un **acceso igualitario y seguro** a la educación para todos los niños, especialmente en el contexto del proceso de educación a distancia impuesto por la pandemia.
169. Aprobar el **Programa de Protección de la Infancia para el período 2021-2025**.
170. Asegurar el correcto funcionamiento del sistema integrado de asistencia y protección de los **niños víctimas o testigos de delitos**, así como de las condiciones especiales en las audiencias.
171. Aplicar eficazmente la Estrategia para Fortalecer las Relaciones Interétnicas en la República de Moldova 2017-2027 y aprobar un nuevo plan de acción para el período 2021-2024.
172. Reforzar las medidas de apoyo para **la población romaní**, en particular mediante la aprobación de un nuevo documento de políticas para el período 2021-2025, y asegurar la inclusión social, económica y educativa, así como el acceso a la justicia y a recursos efectivos.
173. Continuar aplicando medidas de prevención y lucha contra la **trata de personas y la violencia de género** de acuerdo con las normas internacionales y las recomendaciones recibidas de los mecanismos de evaluación, en particular mediante la aprobación de documentos de políticas para el próximo período.
174. Intensificar los esfuerzos para asegurar un entorno favorable para los **defensores de los derechos humanos y la sociedad civil**.
175. Integrar en el marco nacional las recomendaciones internacionales recibidas de los mecanismos de protección de los derechos humanos.
176. Asegurar la aplicación a nivel nacional de la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible.

#### *Notas*

- <sup>1</sup> Ministry of Health, Labour and Social Protection; Ministry of Agriculture, Regional Development and Environment; Ministry of Economy and Infrastructure; Ministry of Finance; Ministry of Education, Culture and Research; Ministry of Justice; Ministry of Internal Affairs; Ministry of Foreign Affairs and European Integration; Ministry of Defence; Interethnic Relations Agency; Superior Council of Magistracy; General Prosecutor's Office; National Anticorruption Centre; Union of Lawyers; Superior Council of Prosecutors; National Council for State Guaranteed Legal Aid; National Institute of Justice; Broadcasting Council; National Centre for Personal Data Protection; National Bureau of Statistics; National Agency for Public Health; Office of Reintegration Policies.
- <sup>2</sup> The NHRAP includes the following priority areas of intervention: (i) harmonizing the regulatory framework with international human rights standards; (ii) ensuring access to justice and strengthening national human rights institutions; (iii) transparency, access to information and freedom of expression; (iv) protection against discrimination and promotion of equality; (v) preventing and combating domestic violence and ensuring gender equality; (vi) increasing access to quality education for all children and young people at all levels of education, in line with international standards; (vii) ensuring universal access to quality, safe and accessible medical services for all; (viii) continuously increasing employment levels by providing employment opportunities for all; (ix) ensuring conditions for the protection, upbringing and education of children in the family environment; (x) improving the legal and policy framework for the protection of the rights of persons with disabilities; (xi) ensuring the integration of persons belonging to national minorities in all areas of activity of the State and combating discrimination against persons belonging to minority groups; (xii) ensuring respect for human rights in localities on the left bank of the Nistru River.
- <sup>3</sup> Decision no. 65/2019. The powers of the Council include: coordinating and implementing a uniform state policy in the field of human rights; overseeing the process of drafting, implementing and evaluating human rights policy documents; examining and approving half-yearly reports on the implementation of the NHRAP; facilitating interaction with international human rights protection mechanisms; coordinating the implementation of international recommendations in the field of human rights, including those addressed to the Republic of Moldova in the framework of the universal periodic review of human rights; assessing the degree of respect for human rights and approving initial and periodic national reports on the implementation of international treaties to which the Republic of Moldova is a party; creating, if necessary, specialized commissions and groups of experts and supervising their activity; etc.

- <sup>4</sup> The NHRAP implementation is coordinated at two levels: inter-sectoral strategic coordination carried out by the NHRC as a coordinating advisory body, composed of representatives of the Parliament, Government, central public administration authorities, law enforcement agencies, human rights institutions, civil society; and technical coordination carried out by the Permanent Secretariat for Human Rights.
- <sup>5</sup> <https://cancelaria.gov.md/node/5160>.
- <sup>6</sup> The changes have established the authority that shall appoint the People's Advocate, his mission, immunities and guarantees, aspects regarding the independence and incompatibilities of the position of People's Advocate, as well as the conditions that need to be met by potential candidates for the position of People's Advocate.
- <sup>7</sup> Law no. 52/2014.
- <sup>8</sup> By Government Decision no. 797/2020, the draft law for amending Law no. 52/2014 on the People's Advocate was approved. Its purpose is to ensure the observance of the rights and legitimate interests of entrepreneurs by public authorities, by organizations and enterprises, regardless of form of ownership or legal form of organization, by non-profit organizations and by responsible officials at all levels.
- <sup>9</sup> Law no. 298/2012.
- <sup>10</sup> The Equality Council [Council for Preventing and Eliminating Discrimination and Ensuring Equality] obtained membership of EQUINET [European Network of Equality Bodies] in 2017.
- <sup>11</sup> Law no. 13/2017.
- <sup>12</sup> Law no. 371/2006.
- <sup>13</sup> Law no. 302/2016.
- <sup>14</sup> Signed by the Republic of Moldova on 3 March 2017.
- <sup>15</sup> Signed by the Republic of Moldova on 6 February 2017.
- <sup>16</sup> Law no. 113/2020 on amending some regulatory acts.
- <sup>17</sup> Thus, during the reporting period, the Republic of Moldova was visited by the UN Special Rapporteur on minority issues (20-29 June 2016) and the UN Special Rapporteur on the situation of human rights defenders (25-29 June 2018). During the visits, the Rapporteurs appreciated the openness and the high level of cooperation from the Moldovan authorities. The reports prepared by the Special Rapporteurs following the visits and related recommendations were disseminated to responsible public authorities for consideration and implementation. Progress in their implementation is being monitored through an integrated tool for monitoring international recommendations managed by the Permanent Secretariat for Human Rights. At the end of 2019, the visit to the Republic of Moldova of the UN Special Rapporteur on trafficking in persons, especially women and children, was agreed, but the visit was cancelled due to the pandemic.
- <sup>18</sup> In addition to the visits of the two Special Rapporteurs to Tiraspol, in 2018, the UN Expert Thomas Hammarberg made a follow-up visit to his report of 2013 regarding the human rights situation in the Transnistrian region.
- <sup>19</sup> [https://tbinternet.ohchr.org/\\_layouts/15/TreatyBodyExternal/countries.aspx?CountryCode=MDA&Lang=EN](https://tbinternet.ohchr.org/_layouts/15/TreatyBodyExternal/countries.aspx?CountryCode=MDA&Lang=EN)
  - October 2016 – The 3<sup>rd</sup> Periodic Report on the implementation of the International Covenant on Civil and Political Rights, 118<sup>th</sup> session of the Human Rights Committee.
  - March 2017 – The initial report of the Republic of Moldova on the implementation of the Convention on the Rights of Persons with Disabilities, 17<sup>th</sup> session of CRPD.
  - April 2017 – 10<sup>th</sup>-11<sup>th</sup> Combined Periodic Report on the implementation of the International Convention on the Elimination of All Forms of Racial Discrimination, 92<sup>nd</sup> session of CERD.
  - September 2017 – The 3<sup>rd</sup> Periodic Report on the implementation of the International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights, 62<sup>nd</sup> session of CESCR.
  - September 2017 – The 4<sup>th</sup>-5<sup>th</sup> Combined Periodic Report on the implementation of the Convention on the Rights of the Child, 76<sup>th</sup> session of CRC.
  - November 2017 – The 3<sup>rd</sup> Periodic Report on the implementation of the Convention against Torture and Other Cruel, Inhuman or Degrading Treatment or Punishment, 62<sup>nd</sup> session of CAT.
  - May 2019 – The 5<sup>th</sup> Periodic Report on the implementation of the Framework Convention for the Protection of National Minorities.
  - February 2020 – The 6<sup>th</sup> Periodic Report on the implementation of the Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination against Women, 75<sup>th</sup> session of CEDAW.
  - June 2020 – The 12<sup>th</sup>-14<sup>th</sup> Combined Periodic Report on the implementation of the International Convention on the Elimination of All Forms of Racial Discrimination was submitted to the Committee on the Elimination of Racial Discrimination (CERD) and is to be presented according to the schedule set by the Committee.
  - December 2020 – The 2<sup>nd</sup>-3<sup>rd</sup> Combined Periodic Report on the implementation of the Convention on the Rights of Persons with Disabilities was submitted to the Committee on the Rights of Persons with Disabilities (CRPD) and is to be presented according to the schedule set by the Committee.
- <sup>20</sup> Law no. 51/2018.

- <sup>21</sup> Law no. 86/2020. The law also contains provisions that eliminate restrictions for certain categories of persons to constitute or participate as founders, members or leaders of non-profit organizations.
- <sup>22</sup> Law no. 100/2017 on regulatory acts, Government Decision no. 610/2018 on the Government Regulation, Law no. 239/2008 on transparency in decision making, Government Decision no. 967/2016 on the mechanism of public consultation with civil society in the decision-making process.
- <sup>23</sup> On 18 July 2014, the Parliament adopted the so-called Law on 2%. The law allows individuals to give annually 2% of their income tax to domestic non-governmental organizations acting in the public interest and to religious organizations. At the initiative of civil society organizations, the Parliament amended this law on 21 July 2016 in order to provide equal conditions of access to and use of money, as well as reporting, to all beneficiaries of the Law on 2%, and to improve the mechanism of percentage designation. On 2 November 2016, the Government approved the Regulation on the percentage designation mechanism, which is also the instrument for application of the Law on 2%. By Law no. 308/2018, the Parliament transferred all responsibilities under the Law on 2% from the Ministry of Justice to the Public Services Agency. On 18 January 2019, the Government made some amendments to the Regulation on the percentage designation mechanism. According to the report of the Legal Resources Centre of Moldova regarding the implementation of the 2% mechanism in the Republic of Moldova in 2020, in the third year of percentage designation, 731 non-profit organizations (634 associations, foundations and private institutions and 97 religious denominations and their parts) were registered in the list of the 2% beneficiaries. The number of organizations participating in the 2% mechanism increased by 23% compared to 2018.
- <sup>24</sup> Law no. 174/2018.
- <sup>25</sup> In accordance with Article 21 of the Code of Audio-visual Media Services.
- <sup>26</sup> Also, the reports on the supervision of the local audio-visual space in 2018-2020 are published on the website of the Broadcasting Council, <http://www.audiovizual.md/reports/8>
- <sup>27</sup> Law no. 262/2018.
- <sup>28</sup> The ex-post assessment report is published on the website of the Parliament in the section “Parliamentary control” “Legislative impact and analysis of the effectiveness of laws.” Following the assessment, the Parliamentary Commission asked the Government to prepare and promote, as a matter of priority; (i) a draft law for substantial amendment of Law no. 982/2000 on access to information or a draft law on free access to information of public interest, and (ii) a draft law on amending the related legal framework.
- <sup>29</sup> In 2019 – 52 novice civil servants from central and local public authorities, in 2020 – 248 novice civil servants and 49 civil servants in managerial/executive positions.
- <sup>30</sup> In 2019, the draft law was subject to adjustment procedures following multiple consultations with national and foreign experts, including the OSCE/ODIHR Opinion of 26 April 2019 and the proposals received from civil society.
- <sup>31</sup> Approved by Law no. 174/2018.
- <sup>32</sup> Broadcasting Council Decision no. 61/219 of 30 December 2019.
- <sup>33</sup> Parliament Decision no. 210/2015.
- <sup>34</sup> Government Decision no. 13/2017.
- <sup>35</sup> Government Decision no. 1019/2018.
- <sup>36</sup> Government Decision no. 18/2019.
- <sup>37</sup> Government Decision no. 980/2020.
- <sup>38</sup> The project was funded by the Ministry of Foreign Affairs of Denmark and implemented by UNDP.
- <sup>39</sup> The Guide explains the Council’s responsibilities, forms of discrimination, protected criteria and the procedure for examining complaints of discrimination by the Council. At the same time, in order to be accessible to visually impaired people, the Petitioner’s Guide was transcribed to Braille and the sound version of it was developed in Romanian and Russian, all available on the Council’s official website [www.egalitate.md](http://www.egalitate.md).
- <sup>40</sup> In order to continue constructive cooperation, on 20 September 2019 these three institutions signed the Joint Declaration on the conduct and coverage of the electoral campaign without discrimination and hate speech, “reaffirming the devotion to respect for human rights and ensuring equality for all persons in the Republic of Moldova in the political, economic, social, cultural and other spheres of life, regardless of race, colour, nationality, ethnic origin, language, religion or belief, sex, age, disability, opinion, political affiliation or any other similar criteria.” In the context of the electoral campaign in October 2019, the signatory institutions appealed to politicians, electoral candidates, journalists, opinion leaders, etc. to respect democratic values, promote the principle of equality and non-discrimination, avoid hate speech and respect human dignity. On 28 September 2019, the Broadcasting Council, as the regulatory authority in the field of audio-visual communication, adhered to this Declaration, too.
- <sup>41</sup> Approved by Government Decision no. 1464/2016. The strategy is a policy document that determines the national mechanisms for strengthening interethnic concord, developing civic identity towards the State of the Republic of Moldova, ensuring the necessary conditions for non-native speaking citizens, including adults, to study and use the state language, promoting national minority languages, ensuring

the access of persons belonging to national minorities to information and media in their languages, promoting diversity in society and participation of national minorities in public life and facilitating intercultural dialogue. The implementation of the Strategy is based on action plans approved by the Government, in three stages.

- <sup>42</sup> Approved by Government Decision no. 1019/2017. The action plan has been aligned with the provisions of the Strategy and included several measures, specific actions and joint projects to achieve the basic objectives of the Strategy. These included: operational research focused on analysing the current situation in this area, identifying pressing issues and risks, examining the situation in the field of representation and participation of ethnic groups in the public service. Sufficient attention has been paid to developing the competence and raising awareness of non-governmental organizations, journalists, civil servants and other social groups, by organizing workshops, seminars and consultations. The Plan also provided for the continuous organization of traditional national-cultural events, such as festivals, round tables, conferences, etc. and other activities focused on intercultural dialogue, intercultural education and interaction. According to the Action Plan, a series of activities was carried out in various fields, financially supported by international bodies and the budget of the responsible institutions. From the state budget, according to Government Decision no. 1019/2017, were allocated 2,570,795 MDL; external assistance amounted to 2,101,822 MDL.
- <sup>43</sup> Law no. 121/2012.
- <sup>44</sup> In 2018, three years later, the Equality Council, with the support of development partners, assessed the perceptions and attitudes of the population towards equality. The comparison with 2015 showed a decrease in the social distance index of certain minority groups in the Republic of Moldova. However, the lowest level of acceptance remains for LGBT people, people living with HIV/AIDS, Roma, former detainees. Study on perceptions and attitudes towards equality in the Republic of Moldova, 2018, <http://egalitate.md/wp-content/uploads/2016/04/Studiu-privind-percep--iile.pdf>
- <sup>45</sup> Government Decision no. 734/2016. The main objectives outlined in the Action Plan for 2016-2020 provided for: creation of an inclusive and efficient education system based on the principles of fairness, non-discrimination and respect for diversity, which will contribute to the integration of the Roma population in society; significant increase of employment of the Roma people and increase their economic well-being; improving the health of the Roma population and ensuring non-discriminatory access to medical services; ensuring decent living conditions for Roma people and increasing their quality of life; improving Roma participation and reducing discrimination. Report on the implementation of the Plan: <http://www.ari.gov.md/ro/content/raportul-privind-implementarea-planului-de-ac%C5%A3iuni-pentru-sus%C5%A3inerea-popula%C5%A3iei-de-etnie>
- <sup>46</sup> Government Decision no. 945/2018. Government Decision no. 952/2020. Expenditures for the maintenance of the social service “Community Mediator” are made through transfers for special purposes from the state budget to local budgets. In 2018, for the maintenance of the social service “Community Mediator,” out of the approved amount of 2,239.6 thousand MDL for 47 units, actual expenses amounted to 1,147.7 thousand MDL. In 2019, for the maintenance of the social service “Community Mediator,” out of the approved amount of 2,485.1 thousand MDL for 47 units, actual expenses amounted to 1,690.8 thousand MDL. For 2020, funds approved for this purpose in the state budget amounted to 3,440.5 thousand MDL for 54 units, of which actual expenses amounted to 2,141.9 thousand MDL. Community mediators have an important task in consolidating the Roma community by ensuring balance in cooperation between public institutions and the community, facilitating communication and collaboration between them.
- <sup>47</sup> Restrictions for migrants: the right to elect and to be elected to legislative, executive and other eligible bodies, to participate in universal suffrage; to be appointed to positions or involved in activities for which the citizenship of the Republic of Moldova is required; to be members of parties or other socio-political organizations; to organize or attend meetings that are detrimental to public order or national security; to organize or finance political parties, other similar groups and to be members of them; to fulfil military service in the armed forces of the Republic of Moldova; to be employed without having a work permit.
- <sup>48</sup> Approved by Government Decision no. 736/2016.
- <sup>49</sup> Law no. 23/2017.
- <sup>50</sup> Law no. 165/2017.
- <sup>51</sup> Adopted by Law no. 231/2011.
- <sup>52</sup> The implementation of the Justice Sector Reform Strategy for 2011-2016 has contributed to the creation of a new regulatory basis for most institutions and professions in the justice sector. Most of these provisions were put into practice, while others continue to be gradually implemented today to produce the results expected by the JSRS.
- <sup>53</sup> As a result of the evaluation mission concerning the implementation of the JSRS, a team of Council of Europe experts (country visit conducted between 19 and 22 September 2017) presented a report to the Ministry of Justice, and their recommendations were taken into consideration in the elaboration of the new strategic document, adopted in November 2020.

- <sup>54</sup> Progress reports on the implementation of the Justice Sector Reform Strategy for 2011-2016 JSRS are available online: <http://justice.gov.md/tabview.php?l=en&idc=489>. The most important achievements were legislative and institutional reforms: strengthening the administrative capacity of the judiciary (Superior Council of Magistracy and its specialized bodies); reorganizing the judiciary by optimizing the map of courts, the number of first level judges – staged and gradual process, until 31 December 2027, according to the provisions of Law no. 76/2016 and Parliament Decision no. 21/2017 on approval of the plan for the construction of new buildings and/or renovation of existing buildings, necessary for the proper functioning of the court system; creating new mechanisms for selection, performance assessment and disciplinary liability of judges; strengthening the role and status of the Judicial Inspection; reform of the National Institute of Justice; strengthening the state-guaranteed legal aid system, broadening the spectrum of assistance and the range of subjects; reviewing the procedures for enforcing judgments; rethinking and strengthening the standards of organization and functioning of the professions related to the justice sector: notaries, lawyers, bailiffs, judicial experts, mediators, authorized administrators, translators/interpreters; reform of the prosecutor's office, of its administration bodies, of the status of prosecutors, and creation, strengthening of specialized prosecutor's offices; creating the legislative framework for the rehabilitation of victims of crime and strengthening the child-friendly justice system; establishing new mechanisms to prevent corruption and ensure integrity in the justice sector; reviewing the codes of ethics of actors in the justice sector and creating mechanisms for investigating/reacting to ethical violations; launching the process of modernization and strengthening of the legal and institutional framework of the penitentiary system and the probation system; etc.
- <sup>55</sup> Research on society's trust in justice, performed during the implementation of the JSRS, showed some development. According to the data provided by the Public Opinion Barometer in 2011, the degree of citizens' trust in justice was 18%, and in 2019, following reforms in the sector, 26% on the population said they trusted the judiciary. At the end of the implementation of the new stage of reform, a new stage of improvement or "fine-tuning" of the already adopted regulatory framework will take shape, with strengthening of the institutional and professional capacity of the reformed institutions, aligning of the justice reform processes with the recommendations and standards of relevant international instruments and with the commitments of the Republic of Moldova before development partners.
- <sup>56</sup> Law no. 133/2018. It was the first full revision of the Civil Code since its adoption in 2002 and was the result of more than four years of consistent effort, involving a significant number of experts, practitioners and academics.
- <sup>57</sup> Law no. 18 of 15 February 2018 on amending and supplementing some legislative acts. The law ensured the implementation of the recommendations of the Venice Commission (no. 755) of 2014. In addition, those changes detailed the procedure for preparing cases for examination (first instance and appeal), tightened the rules for presenting evidence and summoning participants, and introduced the possibility of submitting procedural documents in electronic format (e-file system).
- <sup>58</sup> It currently enables the creation and administration of an electronic file by submitting applications to court online, with the parties' access to the file, electronic coordination of the court hearing agenda by the participants in the trial, presentation of evidence and distribution of materials in electronic format, introduction of electronic citation mechanism, etc.
- <sup>59</sup> Order of the Minister of Justice no. 550 of 10 October 2018 and Superior Council of Magistracy Decision no. 387/20 of 2 October 2018.
- <sup>60</sup> By reviewing the process of examining disciplinary violations, they strengthened the role of the inspector-judge, excluded vague interpretations of the facts that constitute disciplinary violations of judges and clarified the issues related to the activity of the Disciplinary Board. Other amendments, adopted by Law no. 137/2018, were intended to increase the efficiency and independence of the judiciary; strengthen the role of the Superior Council of Magistracy (SCM); promote a merit-based and transparent system for selection and career of judges; standardize access to the position of judge by amending the legal provisions concerning the criteria for selection, evaluation and promotion of judges; ensure the competitiveness of procedures for the promotion and transfer of judges; ensure the functional autonomy of the Judicial Inspection from the SCM and strengthen the role of the SCM, particularly by limiting membership to a single term. In addition, the right to vote of the Prosecutor General, the President of the Supreme Court of Justice and the Minister of Justice in matters relating to the career of judges (appointment, promotion, disciplinary sanction and removal of judges) was limited, and an effective system for challenging SCM decisions was established (full jurisdiction of first instance, compulsory public hearings and motivated judgments).
- <sup>61</sup> That draft law was also sent to the Venice Commission for examination, and two opinions were adopted, one at the 122<sup>nd</sup> plenary session on 20 March 2020 and an additional opinion on 24 June 2020 (CDL-AD(2020)001 and no. 983/2020 CDLAD(2020)007).
- <sup>62</sup> Law no. 132/2016 on the National Integrity Authority; Law no. 133/2016 on the declaration of wealth and personal interests; Law no. 134/2016 on amending and supplementing some legislative acts; Law on integrity no. 82 of 25.05.2017; Law no. 48/2017 on the Criminal Assets Recovery Agency.

- <sup>63</sup> Law no. 308/2017.
- <sup>64</sup> The Government Action Plan for 2016-2018, the National Strategy for Public Order and Security to 2017-2020 and the Action Plan on its implementation; Action Plan for reducing ill-treatment, abuse and discrimination against persons in police custody for 2017-2020; Policy matrix for the implementation of budget support for police reform in 2017-2020.
- <sup>65</sup> 15 TDFs in the following localities: Cimişlia, Teleneşti, Călăraşi, Sîngerei, Ungheni, Briceni, Edineşti, Basarabeasca, Rezina, Căuşeni, Ştefan Vodă, Hînceşti, Cantemir, Cahul, Orhei.
- <sup>66</sup> Approved by Government Decision no. 1462/2016.
- <sup>67</sup> In order to streamline the evaluation and accreditation procedures, 1.5 million MDL were allocated in the state budget for 2019, intended for the repair of medical wards in penitentiary institutions.
- <sup>68</sup> All aspects relevant to the right of persons in state custody (material conditions of detention, discipline, detention regime, medical care, informal hierarchy, etc.) were reflected in the reports of the Government of the Republic of Moldova, prepared from 2017 until now, which can be accessed on the web page of the European Committee for the Prevention of Torture and Inhuman or Degrading Treatment or Punishment (CPT) <https://www.coe.int/en/web/cpt/republic-of-moldova>
- <sup>69</sup> Progressive sentence enforcement regimes are, on the whole, a system that ensures the individualization of security measures and their adjustment and adjustment of the daily regime of the detainee to the degree of risk they present and the progress shown in changing criminal behaviour.
- <sup>70</sup> Law no. 157/2018 on amending the Criminal Code of the Republic of Moldova no. 985/2002.
- <sup>71</sup> Law no. 163/2017 on amending and supplementing some legislative acts.
- <sup>72</sup> On 1 January 2019, Law no. 163/2017 and Law no. 272/2018 entered into force, having introduced into domestic law a preventive and compensatory remedy for ECHR violations with reference to inhuman and degrading conditions of detention.
- <sup>73</sup> So far, 552 people have been conditionally released prematurely based on Article 91 of the Criminal Code (an increase of 59.7%); likewise, 275 people were released by applying Article 92 of the Criminal Code, “Replacing the unenforced part of the sentence with a milder one” (an increase of 95.54%). The total number of the penitentiary population decreased by 585 people. Thus, 7,029 people were detained in penitentiary institutions at the beginning of 2019, compared to 7,614 people detained in the same period of 2018.
- <sup>74</sup> Law no. 245/2018 on amending some legislative acts.
- <sup>75</sup> Law no. 179/2018.
- <sup>76</sup> Government Decision no. 748/2017.
- <sup>77</sup> In the period of 2017-2020, 8 training activities were carried out for the prevention of torture and ill-treatment, with 315 people (prosecutors, judges) being trained. In the segment of initial training, during the reporting period, the electronic course “Prohibition of ill-treatment in the context of law enforcement, security and other coercive contexts,” with a duration of 30 hours of training for each audience promotion, was introduced in the initial training plans for candidates for the positions of judge and prosecutor. In the segment of continuing training, during the reporting period, 9 relevant training activities were carried out, the beneficiaries of which were 221 actors of the justice system.
- <sup>78</sup> Established on 24 October 2016 in accordance with Law no. 52/2014 on the People’s Advocate (Ombudsman). The CPT has 7 members: 2 full members (the People’s Advocate and the People’s Advocate for the Rights of the Child) and 5 members elected through public competition for a term of 5 years, delegated by the civil society.
- <sup>79</sup> The Council may carry out unannounced preventive and monitoring visits to places where detainees are or may be, in accordance with the Optional Protocol to the Convention against Torture and Other Cruel, Inhuman or Degrading Treatment (UN OP CAT). Between 2016 and 2020, the CPT carried out over 100 visits, namely: 42 to places of detention under the Ministry of Internal Affairs, 29 to penitentiaries, 15 to psychiatric institutions, 24 to other institutions. During the same period, 80 reports were issued, with over 800 recommendations. The CPT reports can be seen here: <http://ombudsman.md/consiliul-pentru-prevenirea-torturii/rapoarte/>
- <sup>80</sup> Government Decision no. 461/2018.
- <sup>81</sup> Initiated a new Action Plan for 2021-2022, which is in the process of consultations.
- <sup>82</sup> Law no. 157/2018.
- <sup>83</sup> Law no. 241/2005.
- <sup>84</sup> “Presumed victim of trafficking in human beings”, “National Referral System for the protection and assistance to victims and presumed victims of trafficking in human beings”.
- <sup>85</sup> Government Decision no. 850 /2016; Government Decision no. 255/2017; Government Decision no. 875/2018; Government Decision no. 133/2020.
- <sup>86</sup> During 2018, 28 adult persons from the Russian Federation, Ukraine, Romania, Spain, Lithuania, Italy, and United Arab Emirates were repatriated. During 2019, 2 adults in difficulty were repatriated. During 2020, 10 adults from France, Italy and Portugal were repatriated (from the funds of the state budget).
- <sup>87</sup> Law no. 137/2016.
- <sup>88</sup> Law no. 1/2020.

- <sup>89</sup> On 27.10.2020, by Decision no. 309/26, the Superior Council of Magistracy supplemented Decision no. 34/3 of 24.01.2020 on the specialization of judges in the field of combating THB and related crimes, by which it recommended the presidents of courts to appoint judges specialized in the field of combating THB and related crimes for a term of 5 years, with the possibility to extend this term.
- <sup>90</sup> The necessary assistance was also offered by NGOs and development partners with competence in this field.
- <sup>91</sup> The World Day against Trafficking in Persons (30 July) is marked annually, since 2014, by the anti-trafficking community of the Republic of Moldova. The national campaign Anti-Trafficking Week, in the context of the European Anti-Trafficking Day, has been marked annually on 18 October since 2011, bringing together the entire anti-trafficking community of Moldova in order to inform and raise awareness about the risks and consequences of THB by addressing issues related to national legal and institutional mechanisms in the field of combating THB, effective protection of the rights of THB victims, including access to justice and the role of NGOs in this field. During 2017-2020, about 900 thousand people were informed within national campaigns and through information and counselling platforms. The platform [www.antitrafic.gov.md](http://www.antitrafic.gov.md), launched in 2013, contains hotlines for adults and children both in the country and abroad. The information portal [www.siguronline.md](http://www.siguronline.md) is, inter alia, a national focus point for reporting harmful content and crimes related to online abuse and sexual exploitation of children. The national hotline La Strada 0800 777777 is another tool for accessing assistance and protection for THB victims and for encouraging referrals to law enforcement bodies, including by providing legal aid to THB victims. The Child Phone 116111 (working nonstop) can be appealed by children who need psycho-emotional counselling, children who want information about their rights and how they can be exercised and defended, by the parents or caregivers of children (for counselling, information and consultancy), as well as by people who want to report cases in which a child needs help. The Anti-Trafficking Green Line (+373) 69999021, was established on 8 December 2017 within the General Prosecutor's Office. Other tools are the hotline of the Centre for Combating Trafficking in Persons 022 254 998, specialists in this field, etc. More details on [www.antitrafic.gov.md](http://www.antitrafic.gov.md)
- <sup>92</sup> Law no. 196/2016 on amending and supplementing some legislative acts.
- <sup>93</sup> Law no. 113/2020 contains new provisions that consecutively amend three framework laws (Law no. 45/2007 on preventing and combating domestic violence, Law no. 198/2007 on state-guaranteed legal aid, Law no. 8/2008 on probation).
- <sup>94</sup> Government Decision no. 281/2018. The Strategy was reviewed at mid-term <https://moldova.unwomen.org/ro/biblioteca-digitala/publicatii/2020/09/raport-de-evaluare-gbv>. The Action Plan for the implementation of the Strategy for 2021-2023 has been developed and is in the process of consultation.
- <sup>95</sup> General Police Inspectorate Order no. 360/2018.
- <sup>96</sup> Ministry of Health, Labour and Social Protection Order no. 903/2019.
- <sup>97</sup> Ministry of Health, Labour and Social Protection Order no. 1167/2019.
- <sup>98</sup> 2017 = 202 adults and 72 minors; 2018 = 147 adults and 41 minors; 2019 = 112 adults and 32 minors; 89 adults and 18 minors.
- <sup>99</sup> The helpline for women and girls increases the awareness of the population about the phenomenon of domestic violence and provides psycho-emotional counselling, in the context of ensuring protection for the victims of domestic violence and violence against women. This service provides counselling to callers, 24 hours a day, 7 days a week, for prevention of domestic violence, as well as the services available for subjects of domestic violence.
- <sup>100</sup> In 2019, the police issued 4,250 emergency restraining orders regarding domestic aggressors, 373 more than in 2018 (increase of 9.62%), and 4,939 in 2020 (increase of 13.95% compared to 2019).
- <sup>101</sup> During 2017, in the segment of continuing training, the NIJ carried out 10 training activities in this field, with 264 beneficiaries being trained. During 2018, in the segment of continuing training, the NIJ carried out 13 training activities in this field, with 289 beneficiaries being trained. During 2019, in the segment of continuing training, the NIJ carried out 7 training activities in this field, with 207 beneficiaries being trained. In the segment of initial training, during the reporting period, candidates for the position of judge and prosecutor benefited from training on the topic of violence against women and domestic violence. During 2020, in the segment of continuing training, the NIJ carried out 7 training activities in this field, with 208 beneficiaries being trained.
- <sup>102</sup> Approved by Government Decision no. 1083/2018.
- <sup>103</sup> This document aims to contribute to the strategic distribution of budgetary and institutional resources, depending on the objectives set for the four basic pillars: 1. Sustainable and inclusive economy; 2. Robust human and social capital; 3. Honest and efficient institutions; and 4. Healthy environment. To develop these areas, by 2030, the Government has set 10 (ten) sustainable development goals (SDGs) at the national level, including the ones of ensuring quality education, ensuring effective governance, increasing people's access to infrastructure and improving labour conditions. Each of the 10 (ten) objectives was based on the analysis of the current situation, of the basic factors of people's vulnerability, with the strategic vision being formulated and priority actions outlined. The document

focuses, *inter alia*, on the elimination of poverty in all relevant dimensions, not strictly in monetary terms, but also in terms of equal and indisputable access to quality services and goods. The NDS “Moldova 2030” involves taking greater responsibility to stop environmental degradation and uncontrolled consumption of natural resources, taking into consideration the needs of future generations, involves building a peaceful, supportive and cohesive society, composed of educated people with critical thinking and free of obscurantism, a society in which any conflicts are solved through dialogue, arguments and strict observance of rights.

- <sup>104</sup> Government Decision no. 379/2018 on the state control of entrepreneurial activity based on risk analysis; Government Decision no. 380/2018 on the approval of the Framework Regulation on the organization and functioning of the Council for the settlement of disputes within control bodies; Government Decision no. 464/2018 on the approval of the Regulation on keeping the State Register of Controls.
- <sup>105</sup> Includes 92 permissive acts.
- <sup>106</sup> Government Decision no. 972/2010.
- <sup>107</sup> Government Decision no. 973/2018.
- <sup>108</sup> In order to facilitate the development of SMEs in regions, creation of regional services for support in entrepreneurial development, management of innovation and technology transfer projects, the Network of Business Incubators of Moldova has been working since 2013. As of 30 June 2018, the 11 business incubators hosted 199 companies, including 99 start-ups, 110 managed by young people and 93 companies managed by women. Overall, 902 jobs have been created, including 462 for women and 376 for young people. This network of business incubators generates common turnover of about 99 million MDL.
- <sup>109</sup> The tool for the digitization of SMEs is intended to encourage the digitization of business models, introduction of smart solutions to stimulate productivity and increase the connectivity for rapid adaptation to new economic conditions. As a result, 466 entrepreneurs were trained in the program. Later, in the first call for grants, 180 businesses were approved for financing, in the total amount of 11.36 million MDL, which is expected to maintain over 1,953 jobs. In the SMEs Greening Program, 107 requests for assistance in business greening were received, with the intention to implement investment projects in the total amount of 52.9 million MDL. Training was provided to 80 SMEs. The support program for businesses with potential of growth and internationalization was launched on 28.10.2020, and it will provide methodological assistance and financial support in the form of grants for about 220 SMEs for investment in business development. Within the program, 71 funding applications were received. 50 million MDL were allocated for the implementation of the pilot program for the creation of Multifunctional Industrial Platforms, providing for the creation of 16 multifunctional platforms in regions with a low level of industrialization, such as industrial parks or free economic zones, and their development will take place in several stages. The support instrument for the development of the Business Incubator Network (BIN) is intended to develop the capacities of BIN representatives to assist and support the growth of SMEs competitiveness in the rural environment, including by supporting SMEs in preventing business failure and overcoming socio-economic crises.
- <sup>110</sup> According to the World Bank, the percentage of the population with an income below 5.50 USD per day (adjusted to the purchasing power parity) decreased from 29% in 2010 to 13.3% in 2018.
- <sup>111</sup> According to the National Bureau of Statistics, the rate of absolute poverty, estimated in the population with habitual residence, showed a relative decrease, from 29.5% in 2014 to 23.0% in 2018.
- <sup>112</sup> Government Decision no. 476/2019.
- <sup>113</sup> Law no. 182/2019.
- <sup>114</sup> The monitoring of the population’s access to safely managed drinking water supply and sanitation systems is ensured by the National Agency for Public Health. Thus, the population’s access to improved drinking water systems in 2019 was 98% for the urban population (in 2018 – 97.2%) and 47% for the rural population (in 2018 – 45%). In 2019, 47% of the population had sustainable access to collective sewerage systems (45.8% in 2018 and 45.5% in 2017), of which 76.3% urban and 13% rural.
- <sup>115</sup> Government Decision no. 1063/2016. Regarding the population’s access to improved water and sanitation systems, works are carried out annually for the rehabilitation, modernization and expansion of public water supply systems. According to the National Bureau of Statistics, in 2019, the level of functionality of public sewerage systems was 100% in Chisinau, 94.3% in the Centre region and 88.9% in the South; lower levels were registered in the North region (86.1%) and ATU Gagauzia (62.5%). The total length of public sewerage networks was 2.9 thousand km, or about 109.8 km more than in 2017. During the last 3 years, there has been an increase in the number of population connected to water supply services with about 242.4 thousand consumers. The highest share of localities with access to water supply systems was registered in Chisinau municipality (85.7%) and ATU Gagauzia (78.1%), and localities in the North region have the lowest access rate (35.3%). About 51% of Moldovan villages do not have access to drinking water supply from the public system. In addition, about 2,154.2 thousand people from the country’s population benefited from the public

water supply service, of which 1,268.0 thousand from urban areas and 886.2 thousand from rural areas. Thus, at the national level, the rate of the population's connection to the public water supply service constituted 81.8% of the total population. Over the last 4 years, the population's access to the public water supply service has increased by about 259.0 thousand people (or 13.6 p.p.).

- In 2018-2020, no cases of particularly dangerous water-borne infectious diseases, such as cholera or typhoid fever, were detected in the Republic of Moldova.

<sup>116</sup> Approved by Government Decision no. 1466/2016 and the Ministry of Health, Labour and Social Protection order no. 350 of 05.05.17 for its implementation. In addition, during 2020, the Electronic Register of Water Sources was created (for artesian wells and public wells).

<sup>117</sup> Government Decision no. 1473/ 2016.

<sup>118</sup> Law no. 105/2018.

<sup>119</sup> Government Decision no. 1276/ 2018.

<sup>120</sup> The unemployment allowance was granted to 14,206 beneficiaries (uninsured unemployed) among persons registered as unemployed in territorial employment departments, including those returned from abroad, who do not fall under the provisions of Law no. 105/2018 on the promotion of employment and unemployment insurance. The unemployment allowance was set at 2,775 MDL per month. The total expenses incurred for the payment of the benefit amount to 37.2 million MDL. The beneficiaries of the unemployment allowance of less than 2,775 MDL granted under the Law on the promotion of employment and unemployment insurance received the difference between the calculated unemployment allowance and 2,775 MDL. This difference was paid to 3,104 beneficiaries. The total expenses for this difference payment amounted to 3.7 million MDL.

During the state of emergency, the holders of the entrepreneurial patent issued under the Law on the entrepreneurial patent and the individuals who carry out activities under chapters 102 and 103 of Title II of the Fiscal Code were granted a one-time unemployment aid in the amount of 2,775 MDL, provided that in March 2020 they did not earn insured income. The National Chamber of Social Insurance granted one-time unemployment aid of 2,775 MDL to 10,658 beneficiaries among the holders of the entrepreneurial patent. The total expenses incurred for the payment of the one-time unemployment aid for this category made 29.6 million MDL.

- <sup>121</sup> - In April, May and June, the state-owned company Post of Moldova, through its subdivisions, delivered pensions and social allowances for the elderly and persons with disabilities to their homes, in order to protect people from at-risk groups in the current epidemiological situation.  
- During the state of emergency, the terms for granting all social benefits were suspended, and were to start after this period. So, it was provided that social insurance benefits, including the pension, be granted from the date when such a right was obtained, even if the application and other necessary documents were submitted after the state of emergency.  
- The National Council for Determining Disability and Work Capacity has ex officio extended the term for assigning degrees of disability until 15 May for persons, whose degree of disability expired or expires during the state of emergency. Respectively, the National Chamber of Social Insurance paid pensions and social allowances for persons with disabilities during this period.  
- In order to increase citizens' access to the realization of the right to a pension, Article 31 of the Law on the public pension system has been amended, stipulating that the right to a pension can be requested under a power of attorney. This measure aimed, among other things, to support people abroad who cannot return to the country to realize their right to a pension because of the situation created by the COVID-19 pandemic.  
- The Law on the Population Support Fund has been amended in the part concerning its financing sources, so the revenues and expenditures of the Population Support Fund were increased by 71,000.0 thousand MDL. This increase provided financing for the Social Service "Personal Assistance" (for about 2,600 additional personal assistants). In 2020, 91,262.5 thousand MDL were approved for transfers with special destination from the state budget to the local budgets of the second level in order to finance the Social Service "Personal Assistance".

<sup>122</sup> Starting with 1 April 2020, the minimum guaranteed monthly income (MGMI) was increased from 1,107 MDL (the amount of MGMI after indexation from 1 April 2020) to 1,300 MDL (+193 MDL), and the amount of the MGMI for each child from 50% (553.5 MDL) to 75% (975 MDL). The measure to increase child protection shall also apply after the cessation of the state of emergency. The changes made during the state of emergency led to a significant increase in the number of families that received social aid. This April and May, at least one social aid payment was granted to 75,700 families (+27,753) – the average size of the payment was 1,121 MDL (+298.31), compared to this March – 47,947 families and 822.69 MDL.

Out of the 75,700 families who received social aid, about 20,000 are families with children (about 42,100 children), compared to 15,700 families this March (34,900 children).

Transfers for the payment of social aid were 77.6 million MDL in April 2020 and 76.3 million MDL in May, or 38.2 million MDL and 36.9 million MDL more than in March (39.4 million MDL).

- <sup>123</sup> As of 1 November 2020, 33 applications were submitted claiming compensation for the descendants of medical staff who died as a result of medical activity in the fight against COVID-19. The average size of the estimated allowance is 8,244.77 MDL.
- <sup>124</sup> Approved by Government Decision no. 1000/2016.
- <sup>125</sup> The main actions carried out within this program are related to the strengthening of health promotion capacities among specialists in different fields in. In 2018-2019, there were about 19,300 trainings, where over 623 thousand people were informed and trained. In 2020, about 460 thousand people were trained online, mainly regarding the reduction of the risk of transmission and prevention of the COVID-19 infection.
- <sup>126</sup> The Ministry of Health, Labour and Social Protection Order no. 358 of 12.05.2017 to transpose Directive 2001/83/EC of the European Parliament and of the Council of 6 November 2001.
- <sup>127</sup> The Ministry of Health, Labour and Social Protection Decree no. 323/A of 3 July 2018.
- <sup>128</sup> The share of premature live births was 5.6% compared to 5.4% in the previous year. The number of children who died under the age of one was 278 in 2019, which is 38 children less than in 2018. The infant mortality rate is 8.7 deaths under the age of one per 1,000 live births. The mortality rate of children aged 0-5 in 2019 was 10.2 deaths per 1,000 live births, less than in the previous year (10.9 deaths per 1,000 live births).
- <sup>129</sup> Government Decision no. 681/2018.
- <sup>130</sup> The abortion rate among young women aged 15-19 decreased from 10.6/1,000 in 2017 to 9.2/1,000 in 2019. Morbidity from sexually transmitted infections (syphilis and gonorrhoea) has also decreased by about 30% in the last 5 years. The proportion of 15-year-olds who indicated that they started having sex decreased from 18% in 2014 to 13.3% in 2018, and among 15-year-old sexually active adolescents the use of birth control pills increased from 6% in 2014 to 10% in 2018.
- <sup>131</sup> According to the National Bureau of Statistics, the general mortality rate among adolescents in the period of 2014-2019 did not change, making 0.6 deaths per 1,000 adolescent population; the fertility rate for adolescents aged 15-19 has decreased 1.4 times in the last 5 years – from 41.4 live births per 1,000 women of that age to 28.6 live births per 1,000 women in 2019. The absolute number of births to mothers under 20 has decreased twice in the last 4-5 years, and their proportion in the total number of births has decreased from 9.3% in 2014 to 6.0% in 2019. At the same time, the number of births to mothers under 20 is still twice higher than the European average and about 5 times higher in rural areas than in urban areas. The abortion rate for adolescents aged 15-19 has decreased by about 22% in the last 5 years – from 11.8 to 1,000 women in 2014 to 9.2 per 1,000 women in 2019. The absolute number of abortions in minors under 18 years of age decreased almost twice in the last 3 years – from 243 in 2016 to 141 in 2018 (National Agency for Public Health). Morbidity from sexually transmitted infections (syphilis and gonorrhoea) also decreased by about 30% between 2012 and 2017, but remains high. The proportion of 15-year-olds who indicated that they started having sex decreased from 18% in 2014 to 13.3% in 2018, and among 15-year-old sexually active adolescents the use of birth control pills increased from 6% in 2014 to 10% in 2018 (HBSC, Moldova).
- <sup>132</sup> Decreased from 74% in 2014 to 62% in 2018 (HBSC, Moldova).
- <sup>133</sup> Government Decision no. 1164/2016.
- <sup>134</sup> Government Decision no. 342/2017.
- <sup>135</sup> Government Decision no. 1160/2016. Draft National Program for the Prevention and Control of HIV/AIDS and STIs and draft National Tuberculosis Response Program for 2021-2025 have been prepared.
- <sup>136</sup> Government Decision no. 1030/2017.
- <sup>137</sup> Provides people with mental health problems with medical counselling for assessment, prevention and early detection, psychosocial rehabilitation for social, professional and family inclusion, support and mediation.
- <sup>138</sup> Report on COVID-19 response measures: <https://msmps.gov.md/wp-content/uploads/2020/12/Raport-COVID.pdf>.
- <sup>139</sup> Ministry of Health, Labour and Social Protection (Focal Point).
- <sup>140</sup> Approved by the Extraordinary National Commission for Public Health Decision no. 7 of 13.03.2020.
- <sup>141</sup> Approved by the Extraordinary National Commission for Public Health Decision no. 30 of 11.09.2020.
- <sup>142</sup> For the payment of the bonus to the pre-hospital and hospital emergency medical staff directly involved in the realization of “Providing medical care to patients with COVID-19” based on the definition of contact/suspect/probable/confirmed case, funds were allocated from the Compulsory Health Insurance Fund in the amount of 327.5 million MDL.
- <sup>143</sup> According to the document, in the first stage workers of medical institutions will be immunized, regardless of type of ownership and legal form of organization, in the second stage – adults over 60 years, people with comorbidities, employees of public order, defence and state security structures, workers of the penitentiary and education systems and social services staff. In the third stage, the general population will be vaccinated regardless of age. The Republic of Moldova will benefit from the anti-COVID-19 vaccine through the COVAX platform, which will cover 20% of the population,

as well as through procurements and donations that will be received, thus providing the vaccine for another 50% of the population. At the same time, Romania announced its intention to grant the Republic of Moldova 200 thousand doses of anti-Covid vaccine free of charge.

<sup>144</sup> Government Decision no. 259/2016.

<sup>145</sup> The National Strategy for Preventing and Combating Violence against Women and Domestic Violence for 2018-2023, the National Strategy for Preventing and Combating Trafficking in Human Beings for 2018-2023, as well as sectoral strategies (health, employment, security and defence, etc.).

<sup>146</sup> The implementation of the Strategy is monitored annually via reports on the implementation of the Action Plan related to the policy document.

[http://mmpsf.gov.md/sites/default/files/raport\\_snaefb\\_2018.doc\\_1.pdf](http://mmpsf.gov.md/sites/default/files/raport_snaefb_2018.doc_1.pdf).

<sup>147</sup> Law no. 71/2016, Law no. 196/2016 and Law no. 32/2018 (Key changes: 1. Introduction of 14 calendar days of paid paternity leave; 2. Prohibition of sexist language and sexist images in advertising; 3. Strengthening of the institutional mechanism in the field of ensuring equality between women and men at central and local level; 4. Introduction of the quota of representation of women in the electoral process.

<sup>148</sup> Government Decision no. 259/2018.

<sup>149</sup> Currently, around 2,664 women are employed in the law enforcement structures of the Ministry of Internal Affairs, representing 18% of the total number of employees. Of these, about 200 hold management positions.

<sup>150</sup> <https://egalitatedegen.md/mdocs-posts/raportul-de-monitorizare-a-praport-de-monitorizare-a-respectarii-cotei-de-gen-de-catre-partidele-politice-din-republica-moldova/>.

<sup>151</sup> <https://moldova.unwomen.org/ro/biblioteca-digitala/publicatii/2018/04/barometrul-de-gen>.

<sup>152</sup> In 2015-2016, the Independent Press Association carried out a program to support media outlets in ensuring gender equality. In 2018, during the training “Click for gender equality,” a collaboration agreement was signed between the Independent Press Association and development partners in order to promote gender equality, combat gender stereotypes and promote non-violent communication in the audio-visual media of the Republic of Moldova. In 2017, an external expert monitored for a month 37 media outlets that went through the process of self-monitoring and signed commitments to respect the principles of gender equality in the media. The “Media for gender balance!” campaign was carried out, which aimed to promote positive models of involving women and men and combating gender stereotypes through the media. A video was prepared to promote the amendments approved by Law no. 71 on equal representation of women and men in decision-making processes, [https://www.youtube.com/watch?v=pIRd2kMTrBY&list=PLW8tTWcbumlc\\_BiH2kuObnNi-AYMkgI0F&index=8](https://www.youtube.com/watch?v=pIRd2kMTrBY&list=PLW8tTWcbumlc_BiH2kuObnNi-AYMkgI0F&index=8).

<sup>153</sup> The Ministry of Education, Culture and Research introduced this subject into the curriculum starting with the academic year 2016-2017 as an optional subject for lyceums.

<sup>154</sup> Approved by Government Decision no. 1064/2016 and amended by Government Decision no. 478/2019.

<sup>155</sup> a) 40% to political parties in proportion to their performance in parliamentary elections; b) 40% to political parties in proportion to their performance in the general local elections; c) 10% proportionally to political parties that will respect the quota of at least 40% of female candidates out of the total number of candidates nominated in all single member electoral districts in the parliamentary elections. This increase will be established from the amount allocated to the respective party for the budget year; d) 5% to political parties in proportion to the number of women actually elected to the position of Member of Parliament in single member electoral districts; e) 5% to political parties in proportion to the young people actually elected in the general parliamentary and local elections.

<sup>156</sup> From 3,513 MDL in 2019 to 3,688.7 MDL in 2020. The monthly allowance for the three services has been unified to 1,400 MDL and increased by 30% in the case of placement of children with disabilities, while the one-time placement allowance can be increased by 100% for children up to one-year-old and 50% for children aged 1-3. During this period, the payment of the daily allowance was established and increased for children who have the status of a child temporarily left without parental care or child left without parental care placed in community placement services (11-18 years).

<sup>157</sup> The one-time childbirth allowance was increased by 47% in accordance with the monetary value of the minimum basket of goods required for the birth of a child (from 5,645 MDL in 2018 to 8,299 MDL in 2020). The monthly allowance for the care of a child up to 3 years, in case of insured persons, in 2019 exceeded the subsistence minimum for children of up to 1 year of age by 2.4 times and at the same time covered the subsistence minimum for children aged 1-6 years in proportion of 109.7%. The allowance for twin children or for several children born from a single pregnancy has been established. The monthly allowance for childcare for uninsured persons has been extended from 1.5 to 2 years, and in the case of twins and several children from one pregnancy up to 3 years.

<sup>158</sup> Approved by Government Decision no. 800/2018. As part of secondary family support, families with children can benefit from a monthly financial aid of 700 MDL (up to 6 months) or a one-time aid of up to 4,000 MDL granted for each child.

- <sup>159</sup> For this purpose, the Framework Regulation on the Organization and Operation of the Regional Centre for Integrated Assistance to Child Victims/Witnesses of Crime and the Minimum Quality Standards were approved by Government Decision no. 708/2019, and the location of the service for the northern region was found in Balti, two other locations being Chisinau and Cahul.
- <sup>160</sup> Since the respective documents expired in 2020, the process of developing the Child Protection Program for 2021-2025 has been initiated.
- <sup>161</sup> Annually, an important number of cases of children at risk (2,351 children in 2017; 3,070 children in 2018; and 5,184 children in 2019), found in the records of the guardianship authorities, are solved and the children stay in the family. At the same time, every year, in the group of children at risk, some children are separated from their parents (192 children in 2017, 620 children in 2018 and 523 children in 2019).
- <sup>162</sup> [http://ombudsman.md/wp-content/uploads/2020/12/2724\\_Raport-tematic2.pdf?fbclid=IwAR0SNHwwjPJJZIpfhMAuVxFrEJb0C2y0Gt0zCpvz6Pp4PJfZ472MuKntOD0](http://ombudsman.md/wp-content/uploads/2020/12/2724_Raport-tematic2.pdf?fbclid=IwAR0SNHwwjPJJZIpfhMAuVxFrEJb0C2y0Gt0zCpvz6Pp4PJfZ472MuKntOD0).
- <sup>163</sup> Government Decision no. 270/2014. According to the Instructions, these specialists are obliged to register notifications regarding suspected cases of violence, neglect, exploitation, child trafficking and/or to take note of them in situations where they have identified such cases, applying sectoral procedures, and to immediately inform the local guardianship authority, and within 24 hours to send them the notification form of the suspected case of violence, neglect, exploitation, child trafficking. The notification form is filled with the data available at the time of identification of the suspect case, in particular, based on the information obtained from the source of the report, and the missing information is collected by the case manager during the initial assessment of the case. Likewise, if relevant, the territorial police inspectorate/prosecutor's office, the emergency medical assistance service, the state labour inspectorate are additionally informed.
- <sup>164</sup> Government Decision no. 143/2018.
- <sup>165</sup> Government Decision no. 212/2017.
- <sup>166</sup> Their number in residential institutions and special education institutions decreased by 26%, from 1,023 in 2018 to 747 in 2020, of which in residential placement by 2.8 times, from 438 to 156 children.
- <sup>167</sup> In 2020 it was provided in Chisinau and Balti, where the Early Childhood Intervention Section was created within the Centre for Temporary Placement and Rehabilitation for Children, offering services to families from the northern districts of the country, in Criuleni, Floresti and Ialoveni, and the number of trained specialists reached 685 (family doctors, nurses and social workers).
- <sup>168</sup> In the first school semester (September-December 2020), about 12% of students enrolled in general education encountered problems in implementing the model selected by the institution, either due to lack of computing devices (7%) or lack of internet connection (5%). At the same time, in April-May 2020 and February-March 2021, with the development of online education at the national level in emergency conditions, about 27% of students in general education, or 87,000 students, remained outside the education system, either because of lack of computing devices (17%), or due to lack of internet connection (10%). Since the beginning of the school year 2020, in order to limit the risk of infection, the authorities have developed a series of regulatory acts that allowed general education institutions to include distance education in their teaching model. At the same time, they established the role of teachers in engaging students without access to technology or internet in education during the pandemic.
- <sup>169</sup> Thus, in September 2020, resources were mobilized for the purchase of about 20 thousand computing devices, 23% being provided by the local public authorities, educational institutions and the Government, and 77% by partners. With 52,770 students currently having difficulties due to the lack of computing devices, these devices cover only 38% of the need among students. Meanwhile, in the first school semester 2020/2021, only 2,500 laptops were distributed. As for the provision with internet connection, in the first school semester 2020/2021, the Government ensured high quality internet for all schools. In order to ensure the sustainability and the record keeping of the distributed computing devices, the Government initiated the creation of the Digital Media Library with computing devices that can be used by any student or teacher who encounters technical problems in the study process.
- <sup>170</sup> Law no. 201/2016.
- <sup>171</sup> Government Decision no. 592/2017.
- <sup>172</sup> Government Decision no. 723/2017.
- <sup>173</sup> The annual report on monitoring the implementation of the Action Plan for 2020 is available at <https://msmps.gov.md/wp-content/uploads/2021/03/Raport-privind-implementarea-%C3%AEn-anul-2020-a-Programului-na%C8%9Bional-de-incluziune-social%C4%83-a-persoanelor-cu-dizabilit%C4%83%C8%9Bi-Final.pdf>.
- <sup>174</sup> Government Decision no. 893/2018.
- <sup>175</sup> Directive of the Prime Minister of the Republic of Moldova, no. 43 of 4 May 2017.
- <sup>176</sup> In the context of the implementation of the Concept, Government Decision no. 357/2018 on the determination of disability has been approved, according to which, one of the main responsibilities of

the National Centre for Determining Disability and Capacity at Work (CNDDCM) is to develop criteria for determining the degree of disability in children and adults, according to relevant international standards.

<sup>177</sup> Government Decision no. 198/2019.

<sup>178</sup> Government Decision no. 569/2019.

<sup>179</sup> Government Decision no. 569/2019.

<sup>180</sup> Government Decision no. 314/2012 on approval of the Framework Regulation on the organization and operation of the social service *Personal Assistance* and of Minimum Quality Standards.

<sup>181</sup> Government Decision no. 413/2012.

<sup>182</sup> Government Decision no. 75/2014.

<sup>183</sup> In 2020, the following types of social services operated in Moldova: - 28 Sheltered Housing services for 121 beneficiaries, including 12 Sheltered Housings created by the residential institutions managed by the National Social Assistance Agency (NSAA) for 63 beneficiaries; - 15 Community House services for 106 beneficiaries, including 3 Community Houses created by the residential institution managed by NSAA for 18 beneficiaries; - 24 Mobile Team services, for about 680 beneficiaries; - 8 day centres, for about 400 beneficiaries; - 6,058 personal assistants, including 2,657 employees from the funds allocated from the minimum package of social services, who serve 6,113 persons with severe disabilities, and about 2,100 persons still need this service (compared to 2019, the number of personal assistants increased by 2,468 units, from 3,590 to 6,058); - 4 Respiro services, for 160 beneficiaries/year; - 47 family assistants, who have 47 beneficiaries in placement.

<sup>184</sup> During the reporting period, several events were organized, jointly with civil society (Keystone Moldova, AOPD, etc.), communication campaigns to promote the social inclusion of persons with disabilities and their rights, combat discrimination against them, promote their skills, including: - A media campaign to promote the living of deinstitutionalized persons with disabilities in community, with 5 videos produced and distributed: a. "I have a family" ([https://www.youtube.com/watch?v=GNO-HZt\\_Tw4](https://www.youtube.com/watch?v=GNO-HZt_Tw4)); b. "I can work" (<https://www.youtube.com/watch?v=muZIq8cbUg8>); c. "I am learning to be independent" (<http://youtu.be/Qql2zdtW8QI>); d. "I want all the boys from the institution to live in a family" (<http://youtu.be/D1YQR2ReySQ>); e. "I want a better life for my children" (<http://youtu.be/HGZhKkKrKx8>); - An anti-stigma media campaign implemented together with non-profit organizations *Voinicel, Somato and Woman and Child Protection and Support* (<http://youtu.be/HttO8t3z1b8>; <http://youtu.be/myh2fN3NDL8>; <http://youtu.be/f6LJEMkhBm0>); - A media campaign organized together with the parents of children with disabilities, *My child is like your child*. The parents of children with disabilities have prepared 10 personal stories about cases of discrimination, which were broadcast on Radio Noroc and were posted on postcards and distributed nationwide; - The media campaign *Show that You Care*, implemented in partnership with Radio Noroc and TV Moldova 1, focused on promoting the rights of persons with disabilities and encouraging people to combat discrimination against persons with disabilities; - A communication campaign focused on deinstitutionalization and promotion of living in community, with 10 video spots produced together with deinstitutionalized persons with disabilities

([http://www.youtube.com/watch?v=q2aTlp8LNR4&index=1&list=PLPQuptrkWEMMzdJ5qpTaPwCBB0vGUU\\_F\\_](http://www.youtube.com/watch?v=q2aTlp8LNR4&index=1&list=PLPQuptrkWEMMzdJ5qpTaPwCBB0vGUU_F_)), which were broadcast on TV Moldova 1, Jurnal TV, Publika, YouTube, social media for several weeks. In 2016-2017, the media campaign *I Support Inclusion* was organized in order to prevent and combat discrimination against persons with disabilities. The media campaign had 4 basic components: 1) the inclusion of persons with disabilities in the working life with the message "I can work"; 2) combating stereotypes with the message "I am a person, I am not your opinion"; 3) the inclusion of children with special education needs in kindergartens with the message "Let's play together"; 4) persons with disabilities living in community with the message "We are the same". The campaign actions included photo reports, videos, success stories, interviews. During 2017-2019, the Moldovan Alliance of Persons with Disabilities in collaboration with the Ministry of Health, Labour and Social Protection and the Youth Media Centre promoted the image of persons with disabilities based on rights and human dignity, organizing the photo exhibition called *Inspiring People* at the national and local level: Edinet, Balti, Comrat: - <https://gagauzinfo.md/top2/43820-lyudi-kotorye-vdohnovlyayut-v-komrate-otkrylas-fotovystavka-uspeshnyh-lyudey-s-ogranichennymi-vozmozhnostyami.html>.

<sup>185</sup> Law no. 288/2017.

<sup>186</sup> Based on the Joint Order of the Ministry of Health, Labour and Social Protection and the National Medical Insurance Company no. 492/139A of 22 April 2013, insured persons, including those with disabilities, benefit from medicines from the list of those fully or partially compensated from the compulsory health insurance funds to reduce the financial burden and permanent supportive treatment for priority chronic diseases.

<sup>187</sup> Decision no. 58/2018 of the Board of Directors of the National Regulatory Agency for Electronic Communications and Information Technology, on the establishment of requirements and measures for

users with disabilities to have equivalent access to publicly accessible electronic communication services.

<sup>188</sup> Ministry of Health, Labour and Social Protection Order no. 555 of 16.06.2020.

<sup>189</sup> 1) adolescents and young people up to 24 years old; 2) women in the obstetric risk group; 3) women in the somatic risk group (suffering from chronic diseases at risk for pregnancy and childbirth); 4) women who have had an abortion on request during the last year; 5) HIV positive people and those in groups at high risk of HIV infection; 6) victims/survivors of sexual abuse, for emergency contraception; 7) victims/survivors of trafficking in human beings; 8) survivors of exceptional situations, humanitarian crisis or public health emergencies, persons with refugee status, beneficiaries of humanitarian protection in the Republic of Moldova, asylum seekers, stateless persons, migrants; 9) persons with disabilities, including persons with disabilities within residential institutions; 10) persons with mental health problems, in the records of a psychiatrist or of the family doctor; 11) users of drugs and other psychotropic substances, who are in the records of a specialist in narcology; 12) people with low incomes or without incomes.

<sup>190</sup> Promo-LEX Association, ADEPT Association for Participatory Democracy, IDIS “Viitorul”, Institute of Public Policies, Institute for Strategic Initiatives, “Expert Group” Independent Analytical Centre.

<sup>191</sup> Detention and sanctioning of persons for alleged illegal crossing of the administrative line, abduction of persons for alleged treason, declaration of persona non-grata for Moldovan citizens domiciled in the region, excessive convictions for alleged acts of terrorism, censorship of free speech.

<sup>192</sup> During the reporting period, in particular, systematic support and assistance was provided on several individual and high profile cases, such as Horjan, Halabudenco, Lipovcenco, Doaga, Belova, Rjavitin, Lomaca, Glijin, Amarfii, etc. At the same time, over 1,500 petitions were examined and resolved, advice was provided to over 6,000 applicants, over 500 inter-institutional meetings were held to address various issues related to the difficulties encountered in protecting human rights in the Transnistrian region.

---